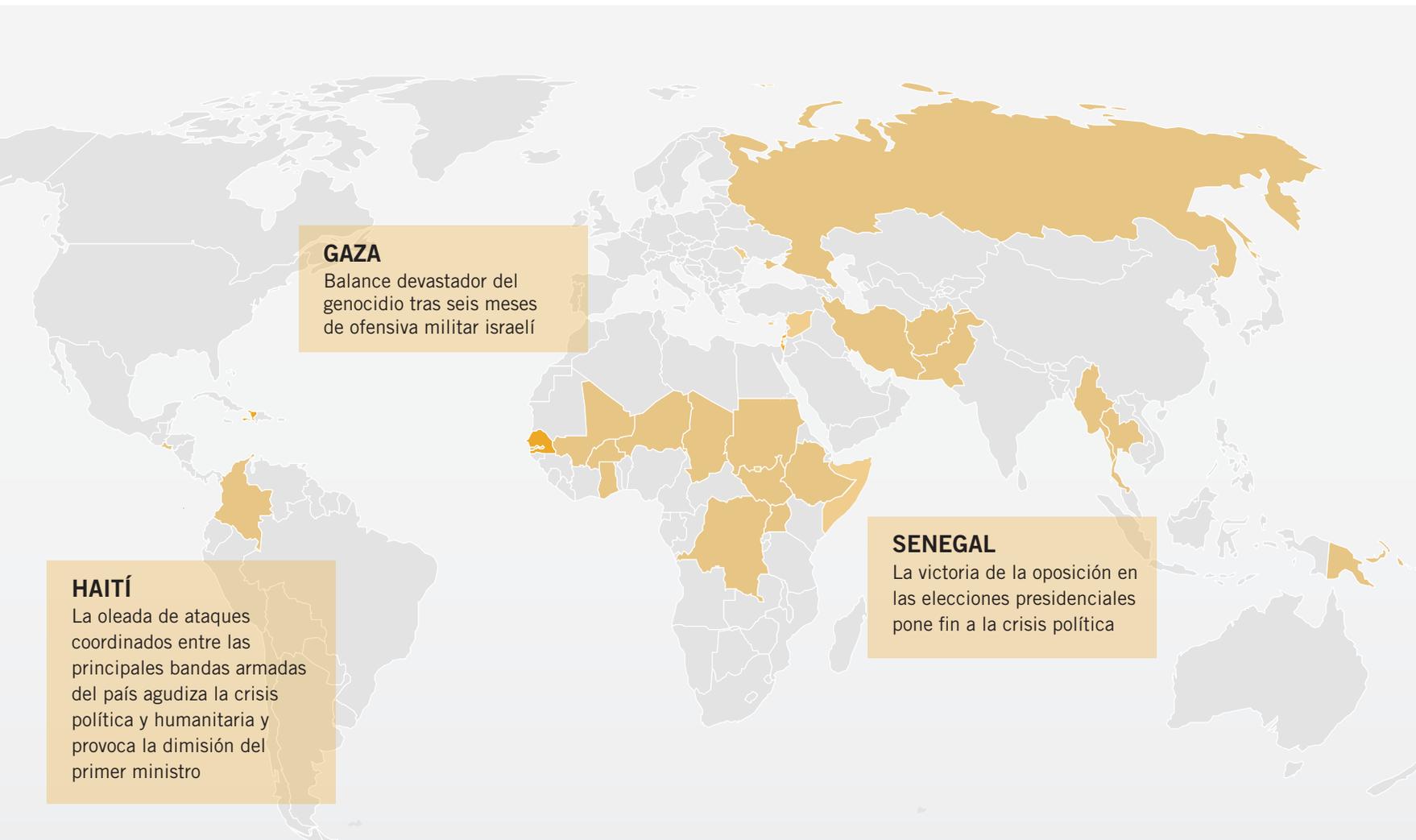


# Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Abril 2024

êc̃p escola de cultura de pau

UAB  
Universitat Autònoma de Barcelona



## GAZA

Balance devastador del genocidio tras seis meses de ofensiva militar israelí

## HAITÍ

La oleada de ataques coordinados entre las principales bandas armadas del país agudiza la crisis política y humanitaria y provoca la dimisión del primer ministro

## SENEGAL

La victoria de la oposición en las elecciones presidenciales pone fin a la crisis política

## Otros casos analizados en esta edición:

### ÁFRICA

Chad  
Etiopía  
Ghana, Uganda y Gambia  
Malí  
RDC  
Sahel occidental  
Sudán  
Sudán del sur

### AMÉRICA

Colombia  
El Salvador

### ASIA Y EL PACÍFICO

Myanmar  
Pakistán – Afganistán  
Papúa Nueva Guinea  
Tailandia

### EUROPA

Chipre  
Moldova  
Rusia

### ORIENTE MEDIO

Israel – Hezbollah, Irán  
Siria

Con el apoyo de:



• *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Este número abarca el periodo desde enero hasta el 9 de abril de 2024.

**Escenarios de riesgo y oportunidades de paz** es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre enero y el 9 de abril de 2024.

## Casos destacados:

**GAZA:** Balance devastador del genocidio tras seis meses de ofensiva militar israelí

**SENEGAL:** La victoria de la oposición en las elecciones presidenciales pone fin a la crisis política en el país

**HAITÍ:** La oleada de ataques coordinados entre las principales bandas armadas del país agudiza la crisis política y humanitaria y provoca la dimisión del primer ministro

## Otros casos analizados en esta edición:

### ÁFRICA

**CHAD:** La muerte del opositor y primo del presidente, Yaya Dillo, evidencia tensiones en la élite en el poder de cara a las elecciones presidenciales

**ETIOPÍA:** Incremento de las hostilidades en Amhara y en Oromiya y tensiones como consecuencia de la lenta implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y Tigré

**GHANA, UGANDA Y GAMBIA:** Retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas y el colectivo LGTBIQ+

**MALÍ:** La Junta Militar da por cerrado el Acuerdo de Argel de 2015 y anuncia un nuevo diálogo nacional para la paz y la reconciliación

**RDC:** Se agrava la situación en los diferentes focos de violencia en el país en paralelo a la apertura de una ventana de diálogo con Rwanda

**SAHEL OCCIDENTAL:** Níger, Burkina Faso y Malí anuncian su retirada inmediata de la CEDEAO

**SUDÁN:** La ONU advierte que la guerra en el país corre el riesgo de desencadenar la mayor crisis de hambre del mundo

**SUDÁN DEL SUR:** Kenya asumirá la mediación en las conversaciones de paz

### AMÉRICA

**COLOMBIA:** Las diferentes negociaciones de paz atraviesan importantes crisis a pesar de los avances y se abre un nuevo escenario de diálogo con la Segunda Marquetalia

**EL SALVADOR:** La abrumadora victoria del presidente Bukele en las elecciones presidenciales, legislativas y locales provoca una concentración de poder sin precedentes y acrecienta temores sobre una deriva autoritaria del país

### ASIA Y EL PACÍFICO

**MYANMAR:** Escala la violencia, mientras el régimen da signos de debilidad militar

**PAKISTÁN – AFGANISTÁN:** Se incrementa gravemente la tensión entre los países vecinos

**PAPÚA NUEVA GUINEA:** El Gobierno anuncia un acuerdo de cese de hostilidades entre las dos alianzas tribales involucradas en uno de los peores episodios de violencia en la historia reciente del país

**TAILANDIA:** Tras un año de parálisis en el proceso de paz, el Gobierno y el grupo armado BRN alcanzan un acuerdo para tratar de reducir los niveles de violencia en el sur del país y explorar soluciones políticas al conflicto

### EUROPA

**CHIPRE:** La enviada personal del secretario general de la ONU inicia consultas multinivel para explorar bases de acuerdo sobre un reinicio de las negociaciones

**MOLDOVA:** Se incrementa la tensión política entre el Gobierno estatal y Transnistria y el país se retira del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

**RUSIA:** ISIS se atribuye el atentado masivo de Moscú y amenaza con más ataques

### ORIENTE MEDIO

**ISRAEL – HEZBOLLAH, IRÁN:** Escalada de violencia regional amenaza con una guerra abierta

**SIRIA:** Se pone en marcha el organismo para investigar las desapariciones en el marco del conflicto



Fuente: UNRWA

## GAZA

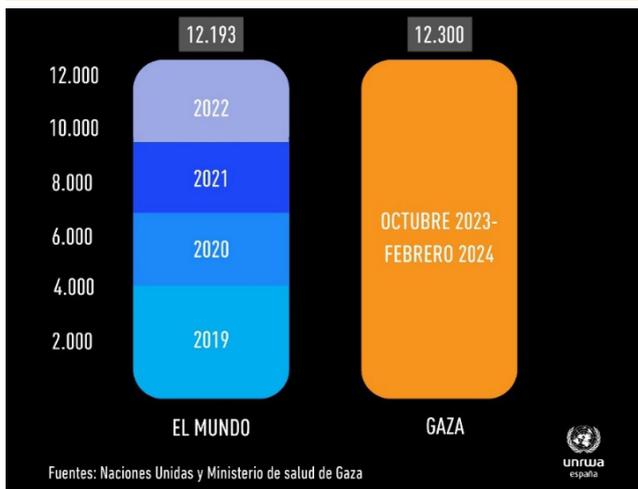
### Balance devastador del genocidio tras seis meses de ofensiva militar israelí

Al cumplirse seis meses de la ofensiva militar israelí sobre Gaza el balance es inequívocamente devastador. Más de 33.000 palestinos y palestinas han muerto como resultado de la campaña israelí, y más de 75.000 están heridos. Se estima que otras 7.000 personas permanecen sepultadas bajo los escombros. La destrucción de los medios de vida, de infraestructuras civiles y los persistentes obstáculos al acceso de ayuda humanitaria han continuado agravando la situación de la población gazatí, afectada por continuos bombardeos, sucesivos desplazamientos forzados, hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud, agua y alimentos. A mediados de marzo se advertía que toda la población de Gaza padece inseguridad alimentaria y que **la hambruna es inminente para 1,1 millones de personas en el norte de la Franja** que ya afrontan una situación de “inseguridad alimentaria catastrófica”. En este escenario, los impactos en los menores de edad están siendo especialmente graves. En tan solo cuatro meses de campaña militar israelí sobre Gaza habían muerto más de 13.000 niños y niñas, **una cifra más alta que la de todos los menores asesinados en contextos de conflicto en el mundo en cuatro años** (ver gráfico 1). Adicionalmente, a 1 de abril habían fallecido al menos 28 menores palestinos a causa de desnutrición y deshidratación. Las consecuencias en la salud mental

de los infantes también son abrumadoras. Como ha constatado Save the Children, que desde hace años viene documentando y alertando sobre el impacto psicológico del contexto de bloqueo y las continuas ofensivas en Gaza, la escalada sin precedentes desde octubre está **exponiendo a los niños y niñas de la Franja a un daño mental de larga duración**. La investigación ha identificado, entre otros, síntomas de trauma y angustia emocional severa, cambios de conducta –introversión, regresión, miedo constante a la muerte– y erosión de los mecanismos de afrontamiento. UNICEF ha advertido que prácticamente la totalidad de los 1,2 millones de menores en Gaza necesita ayuda psicológica. Además, según OCHA, 625.000 estudiantes no tenían acceso a la educación.

Durante el último trimestre indagaciones periodísticas también han alertado sobre el impacto del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la identificación de objetivos por parte de las fuerzas israelíes. Según una **investigación de periodistas israelíes y palestinos de +972 y Local Call**, que cita a varios oficiales de la inteligencia israelí que han participado en la actual campaña sobre Gaza, Israel ha utilizado un programa basado en IA para generar objetivos a ser asesinados. El sistema, denominado *Lavender* (lavanda),

Gráfico 1. Niños/as asesinados en conflictos



Fuente: UNRWA España

ha sido desarrollado para identificar a sospechosos de formar parte de las ramas militares de Hamas y la Jihad Islámica, incluyendo de las filas más bajas. Las fuentes citadas en la investigación aseguran que, sobre todo en las primeras semanas de la ofensiva, el Ejército habría decidido sus ataques basándose casi exclusivamente en la información proporcionada por el programa, que habría identificado a 37.000 potenciales objetivos. En la práctica, los oficiales israelíes se habrían limitado a ratificar los objetivos generados por *Lavender*, dedicando escaso tiempo –“normalmente solo unos 20 segundos”– para autorizar los bombardeos (tras confirmar que el objetivo era un hombre), a pesar de que el programa identificaría objetivos erróneos en al menos 10% de los casos y que en algunas ocasiones señala a personas con apenas relación con los grupos militantes palestinos o incluso sin vínculo alguno. La investigación también indica que el Ejército israelí ha decidido atacar sistemáticamente a los individuos identificados en sus casas, de noche y mientras estaban con sus familias, y no durante actividades militares. De hecho, *Lavender* se complementaría con otros programas automatizados como “*Where’s Daddy?*” (¿Dónde está papá?), diseñado específicamente para localizar objetivos al momento de entrar en sus residencias familiares. Estas lógicas explicarían en parte el elevado número de mujeres y menores que han muerto en los ataques israelíes, que representan el 70% del total de víctimas mortales desde octubre.

### Genocidio e instrumentalización del derecho humanitario

En paralelo a estos hechos, desde principios de 2024 ha habido pronunciamientos relevantes que alertan sobre la comisión de genocidio contra la población palestina y que se han sumado así a las advertencias previas de otras voces expertas. Tras la **demandada presentada por Sudáfrica**

contra Israel en diciembre de 2023 por vulneración de la Convención contra el Genocidio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó seis medidas provisionales el 26 de enero. El máximo tribunal de la ONU dictaminó que Israel debía actuar dentro de sus competencias para prevenir y asegurar que sus fuerzas no cometen ninguno de los actos contemplados en la Convención sobre Genocidio. Aunque la ICJ no solicitó expresamente un alto el fuego inmediato –como solicitaba Sudáfrica– sí exigió a Israel que pusiera en marcha medidas para prevenir actos que deriven en el asesinato de palestinos y palestinas, que les causen daños físicos y mentales severos, que busquen deliberadamente crear unas condiciones de vida tendientes a causar la destrucción total o parcial de este grupo, así como medidas destinadas a prevenir nacimientos entre la población palestina. La ICJ también exigió a Israel que previniera y castigara las incitaciones abiertas y públicas a cometer genocidio contra los palestinos y que adoptara decisiones efectivas para garantizar de manera inmediata la provisión de servicios básicos y asistencia humanitaria a la población gazatí. Aunque el dictamen de la CIJ no es definitivo respecto a si los actos cometidos por Israel son constitutivos de genocidio, supone un indicio contundente por parte de los jueces respecto a un riesgo creíble de “prejuicio irreparable” para la población palestina. De hecho, la comunicación sobre las medidas provisionales

de la ICJ señala explícitamente que en la visión del tribunal los hechos y circunstancias indican que “al menos algunos de los derechos reclamados por Sudáfrica y para los cuales está solicitando protección son plausibles”. La ICJ dio un mes a Israel para presentar un informe sobre la implementación de las medidas provisionales, pero la situación continuó deteriorándose.

Al pronunciamiento de la ICJ se sumó en marzo el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación en los Territorios Ocupados Palestinos en 1967, Francesca Albanese, que concluyó que existen motivos razonables para considerar que se alcanza el umbral que indica la comisión de genocidio por parte de Israel. El documento, titulado “*Anatomía de un genocidio*” –que condena los crímenes cometidos por Hamas y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre– se centra en analizar la situación en Gaza (no valora los hechos recientes en Cisjordania). El informe subraya que la lógica de la violencia genocida desplegada por Israel forma parte de su proyecto de colonialismo de asentamiento, por lo que debe entenderse en relación con acontecimientos previos, incluyendo diversos episodios de limpieza étnica de población palestina. La relatora especial presenta evidencias para sustentar que Israel habría vulnerado al menos tres de los actos prohibidos por la Convención contra el genocidio con sus acciones contra la población de Gaza: asesinar a miembros de un grupo de población, causar daños corporales o psíquicos graves a los integrantes de un grupo, e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida

destinadas a provocar su destrucción física total o parcial. Adicionalmente, el informe de Francesca Albanese indica que el Ejecutivo, el liderazgo militar y soldados de Israel han distorsionado intencionadamente los principios de *ius in bello* y aporta una serie de antecedentes y ejemplos sobre la instrumentalización del derecho internacional humanitario por parte de las autoridades israelíes para intentar legitimar sus acciones.

### Dobles raseros y presiones limitadas

A pesar de estos pronunciamientos, diversos países continuaron suministrando armas, además de respaldo político, a Israel. Ello, pese a que diversas voces insistieron en que este tipo de prácticas podían ser señaladas y perseguidas en el futuro como complicidad con el genocidio. Tras el dictamen de enero de la ICJ, por ejemplo, no hubo cambios sustantivos en la política de ayuda militar a Israel por parte de EEUU. Esta situación contrastó con las rápidas medidas adoptadas contra la UNRWA después de que Israel denunciara que 12 (de los 30.000) trabajadores de la agencia habían participado en la ofensiva del 7 de octubre. **Más de una quincena de países decidieron suspender el financiamiento al organismo de la ONU para las personas refugiadas palestinas, entre ellos algunos de sus principales donantes** (EEUU, Alemania, Suiza, Canadá, Holanda, Reino Unido, Italia, Australia y Finlandia). Tras la denuncia del Gobierno de Netanyahu –que se hizo pública el mismo día que la ICJ anunciaba las medidas provisionales en el caso por genocidio– la ONU desvinculó a los trabajadores señalados e inició una investigación interna. No obstante, en febrero **el jefe de la UNRWA subrayaba que Naciones Unidas no había recibido ningún informe por escrito de Israel** con evidencias sobre las acusaciones –a pesar de las peticiones al respecto– y los medios de comunicación que habían accedido al dossier israelí sobre el tema –presentado a varios gobiernos– alertaban que **el documento no contenía pruebas de las acusaciones**. Gobiernos, actores humanitarios y organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre las graves consecuencias de las medidas contra la UNRWA, clave en la asistencia a la población gazatí. Algunas de estas voces subrayaron que la acción de unas cuantas personas –de confirmarse– no podía servir de pretexto para suspender una asistencia vital en un momento crítico y señalaron el **doble rasero y dispar reacción** ante las evidencias presentadas contra Israel por crímenes de guerra y genocidio, que no han desembocado en el fin del apoyo militar o político al Gobierno de Netanyahu.

Ante el evidente deterioro de la situación humanitaria en Gaza y los persistentes obstáculos impuestos por Israel para el acceso de ayuda por vía terrestre, durante el trimestre se pusieron en marcha otras opciones. Entre ellas intentos por sortear el bloqueo a la Franja por vía marítima y la entrega por parte de algunos Gobiernos – como Jordania y EEUU– de ayuda humanitaria por vía aérea. Sin embargo, **esta aproximación fue criticada por actores humanitarios** que denunciaron que estas acciones

solo creaban la “ilusión” de estar haciendo algo, cuando lo urgente era el alto el fuego y el acceso sin restricciones por vía terrestre. Además, esta práctica derivó en **muertes de varios palestinos alcanzados por algunos de los paquetes lanzados desde el aire**. En este contexto se produjo también la que ha sido bautizada como **“masacre de la harina”**, cuando al menos 118 personas murieron y más de 760 resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego contra personas que buscaban alimentos de los camiones de ayuda que se concentraban en una arteria de Ciudad de Gaza. Este incidente, que fue seguido de otros hechos similares aunque con un menor nivel de letalidad en marzo, junto a otros episodios como el **cruento asedio y destrucción del hospital Al-Shifa** –que culminó el 1 de abril– alentó renovadas críticas a Israel y llamamientos a poner fin a su campaña contra la población de Gaza.

En este contexto, las expectativas se centraron en la posibilidad de que las negociaciones indirectas entre las partes condujeran a un alto el fuego coincidiendo con el Ramadán, que se inició el 10 de marzo y culmina el 9 de abril. La tregua, sin embargo, no llegó a concretarse en este período. Pese a ello, cabe destacar que a finales de marzo, y **tras cuatro intentos fallidos**, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la **resolución 2728** llamando a un cese el fuego inmediato, aunque de carácter temporal ya que alude a una tregua durante el Ramadán. La resolución también demanda la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas –unos 134– y el acceso humanitario a Gaza. Esta resolución se aprobó con la notoria abstención de EEUU, que había vetado tres resoluciones similares en el pasado y que presentó una el 22 de marzo, vetada entonces por Rusia y China. Netanyahu criticó la decisión de EEUU y la denunció como un cambio en su política. Pocos días después **la ICJ emitió una nueva orden con medidas adicionales** –en respuesta a una nueva petición de Sudáfrica a principios de ese mes– ante el agravamiento de las condiciones de vida y el hambre de la población palestina en Gaza. El tribunal exigió a Israel medidas sin demora para, en cooperación con la ONU, prestar los servicios básicos y la ayuda humanitaria urgente. El tribunal especificó la necesidad de que Israel permitiera puntos de acceso terrestre y los mantuviera abiertos el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, no fue hasta principios de abril que **el bombardeo israelí a un convoy humanitario identificado como tal de la organización World Central Kitchen (WCK)** motivó mayores presiones de Washington a Israel. La ofensiva, que Israel atribuyó a un “error” y que resultó en la muerte de siete cooperantes internacionales de diversas nacionalidades –Australia, Canadá, Polonia, Reino Unido, EEUU y Palestina–, **motivó numerosas condenas internacionales y un llamamiento de EEUU a un cese el fuego inmediato en Gaza**. En conversación telefónica, Joe Biden advirtió a Netanyahu que el apoyo de EEUU a Israel dependería de medidas concretas para proteger a la población civil y al personal humanitario. En este contexto, se anunció la apertura del paso de Eretz y que los suministros humanitarios para Gaza podrían desembarcar en el puerto de Ashdod.

## ¿Ofensiva en Rafah? ¿Futuro de Netanyahu?

Durante todo el trimestre Netanyahu insistió en que el próximo objetivo de Israel era una operación terrestre sobre Rafah, una campaña que considera clave en su objetivo declarado de “erradicar a Hamas” y que agravaría aún más la ya catastrófica situación de la población gazatí. Se estima que más de la mitad de la población de la Franja –más de 1,4 millones de personas– se concentra en esta localidad fronteriza con Egipto tras los sucesivos y masivos desplazamientos que han forzado a la población palestina a concentrarse en áreas cada vez más pequeñas. En este contexto, el anuncio la primera semana de abril sobre la retirada de tropas terrestres israelíes del sur de la Franja alentó dudas sobre el futuro de la ofensiva israelí. Informaciones preliminares apuntaban a que el repliegue era eminentemente táctico y que pretendería dar un período de descanso a las fuerzas israelíes tras cuatro meses de intensa campaña militar. La **ofensiva sobre Rafah, por tanto, no estaría descartada**, según algunos analistas. EEUU ha confirmado que la reducción de tropas obedece a motivos tácticos, pero ha señalado que **la pausa no indica necesariamente nuevas operaciones militares**, como había afirmado previamente el portavoz israelí. **Washington no se ha opuesto abiertamente a la ofensiva sobre Rafah, pero la ha condicionado a garantías de protección a la población civil.** Medios de prensa israelíes descartaron que la retirada de tropas del sur de Gaza respondiera a presiones de EEUU sobre Netanyahu quien, de hecho, insistió en que ya tenía una fecha para la ofensiva sobre Rafah.

El anuncio del repliegue coincide con el inicio de una nueva ronda de negociaciones indirectas en El Cairo entre delegaciones de Hamas e Israel con la mediación de Egipto, Qatar y EEUU. Según trascendió, en la

***A principios de abril el repliegue de las tropas israelíes del sur de Gaza se consideraba como una medida táctica, que no descarta que Netanyahu insista en el futuro en su plan de invasión terrestre de Rafah***

delegación israelí participan los jefes del Mossad y Shin Bet con un mandato ampliado y también se esperaba la participación del jefe de la CIA. Antes del inicio de estas conversaciones, Hamas reiteró las condiciones de la propuesta que hizo a mediados de marzo, que incluyen un cese el fuego permanente, el retiro de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de la población desplazada y un intercambio “serio” de los rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Netanyahu, por su parte, reiteró que las demandas de Hamas le parecían maximalistas. El primer ministro israelí, sin embargo, estaba sometido

a mayores presiones, a nivel internacional, pero también internamente. El 6 de abril se produjo la mayor protesta contra el gobierno desde octubre, cuando más de 100.000 personas se congregaron en Tel Aviv para exigir un acuerdo con Hamas para la liberación de los rehenes y demandar elecciones anticipadas, que Netanyahu perdería según los pronósticos. Familiares de los rehenes también irrumpieron en el Parlamento para exigir un pacto. Mientras, diversas voces subrayan que el primer ministro obstaculiza un acuerdo con el fin de aferrarse al poder y evitar futuros juicios por corrupción. Al cumplirse seis meses de la ofensiva israelí

sobre Gaza análisis destacaban que **el primer ministro continuaba sin cumplir sus objetivos, que Israel estaba más aislado y en una situación de mayor inseguridad** ante la escalada regional (véase apartado sobre Israel – Hezbollah, Irán). Algunas voces –como la analista israelí de ICG, Mairav Zonszein–, advierten que **poner el foco únicamente en Netanyahu es un error** y que es necesario atender también a la aproximación de la sociedad israelí a la situación en Gaza. Sondeos indican que la inmensa mayoría de los israelíes (88%) apoya la ofensiva militar y algunos incluso plantean la necesidad de un mayor uso de la fuerza, mientras que la mitad de los encuestados se opone a la entrada de ayuda humanitaria a la Franja mientras no se libere a todos los rehenes.



Fuente: Communication Coalition Diomaye President

## SENEGAL

### La victoria de la oposición en las elecciones presidenciales pone fin a la crisis política en el país

Tras tres años de tensiones entre el Gobierno de Senegal, presidido por Macky Sall, y la oposición, que abrieron una importante crisis política, el país celebró el 24 de marzo los comicios presidenciales que dieron como ganador al líder opositor, Bassirou Diomaye Faye. De este modo, el país parece cerrar uno de los capítulos más difíciles y controvertidos de su historia política, abriendo paso a un nuevo Ejecutivo que afronta importantes retos políticos, económicos y sociales.

#### Origen de la crisis política

El origen de la crisis política en el país se remonta al año 2019, cuando Ousmane Sonko, un joven proveniente de la región sureña de Casamance, se presentó a las elecciones liderando el partido Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF por sus siglas en francés). Destaca entonces por su programa político anticolonialista, en donde critica el control económico que ejerce Francia y promete mayor soberanía, eliminar el franco CFA y renegociar los acuerdos mineros y petrolíferos. Sonko quedó tercero en la contienda, pero su figura creció en todo el país. Posteriormente, en febrero de 2021 Sonko fue acusado de violación y detenido, provocando que sus seguidores tomaran las calles al considerar que se trataba

de un movimiento para anular su participación en la carrera presidencial. Un par de años más tarde, el 1 de junio de 2023 Sonko fue condenado a dos años de prisión por “corromper a la juventud”, lo que le inhabilitaba de facto para las elecciones presidenciales, siendo absuelto del cargo de violación. El fallo motivó nuevas movilizaciones y protestas en el país –principalmente en Ziguinchor y Dakar– por parte de partidarios de Sonko, que denunciaron que el veredicto tenía motivaciones políticas. El 2 de junio, el Gobierno desplegó el Ejército en Dakar y, días después, cerró el acceso a Internet. Las movilizaciones fueron duramente reprimidas, contabilizándose, según datos del Gobierno, 16 manifestantes muertos, mientras que Amnistía Internacional reportó 23 víctimas mortales, y el PASTEF elevó a 30 el número de personas muertas. Otras decenas resultaron heridas y unas 500 fueron detenidas en todo el país.

En este contexto de tensión, el 3 de julio de 2023 el presidente Macky Sall anunció que no se presentaría a la reelección, en lo que hubiese representado su tercera candidatura a la presidencia. El anuncio distendió provisionalmente la crisis en el país, ya que la no postulación del mandatario era una de las principales demandas de la oposición. Sin embargo, a finales de julio, la Policía arrestó a Sonko –que hasta el momento

cumplía condena domiciliaria— bajo la acusación de planear una insurrección, mientras que el Gobierno disolvió el PASTEF. En respuesta, Sonko anunció el inicio de una huelga de hambre. En diciembre, el tribunal de primera instancia de Dakar reincorporó a Sonko al registro electoral, permitiéndole poder presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el Gobierno impugnó ante el Tribunal Supremo la decisión judicial.

### Anatomía de la crisis electoral

En medio de la crisis política, tres semanas antes de la fecha de la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero, en un discurso a la nación, Sall anunció que los comicios se pospondrían por un período no especificado, siendo la primera vez en la historia del país que se posponía una votación presidencial. Sall justificó la decisión debido a las acusaciones contra el Consejo Constitucional por su decisión sobre qué candidatos cumplían los requisitos para postularse, en particular los candidatos Ousmane Sonko y Karim Wade —el candidato que Sall pretendía como sucesor—, que fueron excluidos. El 5 de febrero, **el Parlamento de Senegal aprobó retrasar las elecciones presidenciales hasta el 15 de diciembre** en un caótico proceso de votación que tuvo lugar después de que los legisladores de la oposición fueran expulsados por las fuerzas de seguridad de la Cámara cuando intentaban bloquear el proceso de votación. Asimismo, el Parlamento aprobó la extensión del mandato de Sall, que debía finalizar el 2 de abril, hasta la celebración de las nuevas elecciones. **La decisión provocó fuertes manifestaciones de protesta en varios puntos del país.** El Gobierno restringió el acceso a Internet. El aumento de las protestas y de la crisis política en el país generó que el bloque regional de África Occidental (CEDEAO) y otros países instasen a Sall a revertir la decisión.

Posteriormente, el 15 de febrero, en una decisión histórica, **el Consejo Constitucional de Senegal anuló un decreto presidencial** emitido por el mandatario saliente para posponer las elecciones presidenciales, dictaminando que el artículo 103 de la Constitución prohíbe alterar el número o la duración del mandato presidencial. El Consejo determinó que el hecho de que el presidente Sall permaneciera en el poder después de que finalizara su mandato el 2 de abril constituiría una violación de la Carta Magna. Asimismo, el Consejo reconoció que si bien no sería posible organizar las elecciones el 25 de febrero, como estaba previsto inicialmente, dio la orden de organizar las elecciones lo antes posible. Al respecto, 15 de los 20 candidatos que fueron aprobados para presentarse a las elecciones presidenciales, solicitaron que la nueva votación se celebrase a más tardar el 2 de abril, día que finalizaría oficialmente el mandato de Sall. **El documento fue firmado por algunos de los principales contendientes,** incluido el candidato opositor detenido Bassirou Diomaye

Faye y el ex alcalde de Dakar Khalifa Sall, pero no por el primer ministro Amadou Ba, candidato oficialista.

En respuesta a la resolución del Consejo, **Sall instó a un diálogo nacional** para acordar una fecha para celebrar las elecciones, anunciando que de no lograrse, solicitaría al Consejo que encuentre su reemplazo cuando finalice su mandato el 2 de abril. El diálogo nacional se celebró con la asistencia de diversos líderes civiles, políticos y religiosos, pero fue boicoteado por casi todos los candidatos presidenciales. El mismo **acordó celebrar la votación el 2 de junio.** La propuesta fue nuevamente rechazada por el Consejo Constitucional, anunciando la convocatoria para los comicios primero para el 31 de marzo, y posteriormente para el 24 de marzo, con el fin de no coincidir con la Semana Santa. De este modo, los candidatos aprobados para presentarse a los comicios tendrían 17 días para hacer campaña, en lugar de los 21 previstos normalmente por el código electoral. El Consejo también dictaminó que no se podía revisar la lista de 19 candidatos aprobados, entre los cuales no figuró el líder opositor Sonko ni Wade. **Con esta decisión se puso fin a la crisis electoral en el país.**

Paralelamente, en un intento por reducir la crispación política, Sall **propuso un proyecto de ley de amnistía general** para los manifestantes políticos arrestados desde 2021 durante la crisis política que, según algunos grupos de derechos humanos, podrían ser más de mil personas. Entre ellos, Sonko, encarcelado desde julio por “incitación a la insurrección” y sin posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales, y el candidato presidencial suplente de su partido, Bassirou Diomaye Faye, también en prisión, pero autorizado como candidato presidencial. El proyecto de ley de amnistía fue aprobado en el Parlamento senegalés por 94 votos contra 49. Los críticos denunciaron que **el proyecto de ley abre la puerta a la impunidad,** ya que se incluyen en el mismo a las fuerzas de seguridad, responsables de la muerte de unas 60 personas durante las protestas. El Gobierno de Sall, sin embargo, sostuvo que la amnistía permitiría al país salir de una crisis política de tres años de duración. El Ministerio de Justicia afirmó que corresponderá a un juez decidir quién se beneficia de la ley. Una semana después de la aprobación de la norma, Ousmane Sonko y Bassirou Diomaye Faye, fueron liberados de la prisión de Camp Manuel, en Dakar, generando que miles de personas salieran a las calles a celebrarlo.

### Celebración de elecciones y cambio político

Tal y como había determinado el Consejo Constitucional, el 24 de marzo de celebraron las elecciones presidenciales en el país. Bassirou Diomaye Faye, mano derecha de Sonko, se presentó en representación del partido PASTEF. La jornada fue pacífica y contó una alta

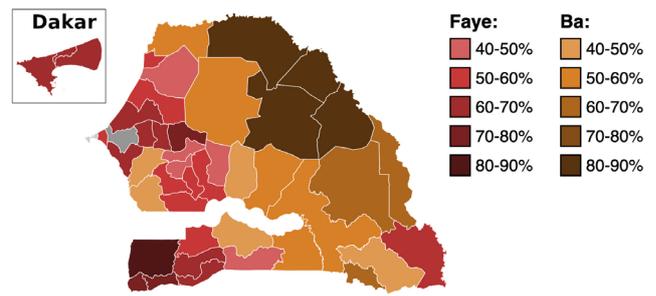
participación. Más de 7 millones de personas estaban registradas para votar en un país de aproximadamente 17 millones de habitantes. Los resultados dieron la victoria a Faye con un 54,28% de los votos, evitando así la celebración de una segunda ronda, y derrocando a su principal rival, Amadou Ba, candidato de la coalición Benno Bokk Yakaar (BBY) que contaba con el respaldo del presidente saliente Sall, quien obtuvo el 35,47% de los votos emitidos. El resto de los candidatos no obtuvieron ninguno más del 3%, reflejando la polarización en el voto. Ba y Sall admitieron la derrota, felicitaron a Faye y lo nombraron ganador. Esta es la cuarta transferencia democrática de poder en Senegal desde que se independizó de Francia hace más de seis décadas.

En tan solo 11 días Faye pasó de estar en prisión a ganar las elecciones y ser nombrado el presidente más joven de la historia de Senegal con 44 años. Tras tomar posesión como presidente, en su primera acción en el cargo, nombró el 2 de abril a Ousmane Sonko como primer ministro, quien anunció que presentaría a Faye una lista de nombramientos ministeriales para su aprobación.

El nuevo Gobierno se enfrenta a importantes retos, marcados por la crisis política y económica, con una elevada tasa de desempleo y un enorme incremento migratorio. Faye prometió luchar contra la corrupción y reformar la economía, así como mejorar el control de Senegal sobre sus recursos naturales mediante la promoción

**En tan solo 11 días el candidato opositor Bassirou Diomaye Faye pasó de estar en prisión a ganar las elecciones y ser nombrado el presidente más joven de la historia de Senegal**

Gráfico 2. Resultados elecciones por departamento



Fuente: Wikipedia

de empresas nacionales, renegociar los contratos de petróleo y gas e introducir una nueva moneda. En política exterior, anunció la reforma de la CEDEAO, después de las diferentes crisis abiertas entre el organismo con múltiples países de la región: Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger (véase el apartado sobre Sahel Occidental). Sin embargo, analistas senegaleses sostienen que la falta de una mayoría en el Parlamento de Senegal y las condiciones financieras impuestas por el FMI podrían impedir el desarrollo de su programa. De hecho, Faye ya dio marcha atrás en su promesa de crear una moneda nacional y anunció que primero buscará reformar la moneda regional CFA, compartida entre 14 naciones de África occidental y central.



Fuente: UNICEF/UNI519095/Joseph.

## HAITÍ

### La oleada de ataques coordinados entre las principales bandas armadas del país agudiza la crisis política y humanitaria y provoca la dimisión del primer ministro

A finales de febrero, una alianza entre las dos principales coaliciones de grupos armados del país (la G-9 y Familia y Aliados y su hasta recientemente principal rival Gpèp) inició una oleada de violencia masiva, saqueos y ataques a puestos de policía, edificios gubernamentales, comercios, instalaciones del puerto, hospitales, escuelas, prisiones (el 5 de marzo, fueron liberados a la fuerza más de 4.000 reclusos de dos de las principales cárceles del país) o incluso el palacio presidencial, aunque el mismo pudo ser repelido por la Policía. Dichos ataques se produjeron coincidiendo con un viaje del primer ministro Ariel Henry a Kenya para concretar el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés) autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre de 2023, y que en principio debería estar liderada por Kenya. En ausencia del primer ministro, el líder de la mencionada alianza G-9, Jimmy Chérizier (alias 'Barbecue'), declaró que si Ariel Henry no dimitía, el país sufriría un genocidio y que si la comunidad internacional seguía apoyando a su gobierno, Haití se enfrentaría a una guerra civil. A pesar de declarar el estado de emergencia y decretar toques de queda nocturnos, las fuerzas de seguridad no pudieron revertir la situación

**Entre el 1 de enero y el 22 de marzo más de 1.500 personas habían muerto a causa de la violencia ejercida por las numerosas bandas que operan en Haití**

y las bandas armadas tomaron el control del principal aeropuerto de Haití y negaron la entrada de Henry al país a su regreso de Kenya, por lo que este se vio obligado a aterrizar y permanecer en Puerto Rico. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicado a finales de marzo señaló que **1.554 personas habían muerto y otras 826 habían resultado heridas entre el 1 de enero y el 22 de marzo** como consecuencia de la violencia ejercida por las numerosas bandas armadas que operan en Haití, unas cifras sin precedentes en la historia del país y que superan ampliamente las del mismo periodo del año anterior. Además, Naciones Unidas advirtió sobre el creciente impacto que está teniendo la acción de grupos o brigadas civiles de autodefensa al margen de la ley y de las fuerzas de seguridad del Estado, provocando la muerte de 528 personas en 2023 y 59 en los tres primeros meses del año.

Ante tal situación y la constatación de haber perdido el apoyo de las principales fuerzas políticas en Haití y también el apoyo de la comunidad internacional, **el 11 de marzo Ariel Henry presentó su dimisión**. El mismo día, tras una reunión de emergencia en Jamaica, CARICOM anunció la conformación de un gobierno de transición compuesto por un

consejo presidencial de nueve miembros (dos de los cuales representantes de la sociedad civil, sin derecho a voto) cuyas principales funciones serán el nombramiento de un nuevo primer ministro y la creación de las condiciones adecuadas para la celebración de nuevas elecciones y también para el despliegue de la MSS. A finales de marzo el consejo presidencial hizo su primer comunicado público señalando que está ultimando un documento sobre su organización y modo de funcionamiento, incluido un acuerdo político transparente entre los sectores involucrados en el proceso, anunciando que una vez tome posesión de cargo oficialmente, implementará un plan de acción destinado a restaurar el orden público y democrático y a celebrar elecciones libres.

Por su parte, a mediados de marzo, el **Gobierno de Kenya anunció que paralizaba temporalmente los preparativos para el despliegue de unos 1.000 efectivos en el seno de la MSS** por considerar que las condiciones políticas en Haití han cambiado significativamente desde que asumió el compromiso de liderar tal misión, y también por entender que una misión de tal envergadura no puede tener un mandato claro ni ser efectivo en el cumplimiento del mismo mientras no haya un gobierno funcional en Haití. En esta línea, **Naciones Unidas señaló que actualmente hay solamente entre 600 y 700 policías trabajando en Puerto Príncipe**, con sólo 9.000 policías activos en todo el país, menos de la mitad de las ratios recomendadas por Naciones Unidas, de modo que las fuerzas de seguridad

***Tras constatar la falta de apoyo de las principales fuerzas políticas de Haití y de la comunidad internacional, el presidente Ariel Henry presentó su dimisión el 11 de marzo***

del Estado se hallaban claramente superadas por las bandas armadas en número de efectivos y armamento.

En cuanto a la crisis humanitaria provocada por la situación de violencia, Naciones Unidas señaló unas 17.000 personas perdieron su hogar durante la reciente oleadas de ataques y que solamente entre el 8 y el 27 de marzo más de 53.000 personas tuvieron que abandonar Puerto Príncipe, el 60% de las cuales dirigiéndose hacia el sur del país, en una región donde ya había más de 116.000 personas que previamente habían abandonado la capital y que había sido duramente afectada por un terremoto en 2021. A mediados de marzo, UNFPA señaló que antes del último episodio de violencia protagonizado por bandas armadas desde finales de febrero, ya había en el país unas 362.000 personas desplazadas internamente en todo el territorio, y que el hecho de que los grupos armados controlaran las principales carreteras del país y accesos a la capital, interrumpiendo las rutas de suministro de alimentos, estaba provocando

una rápida escalada en los niveles de malnutrición de la población. En esta línea, un informe publicado en marzo por la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), casi cinco millones de personas padecen altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, en buena medida como consecuencia de los altos niveles de violencia en el país. Por su parte, OCHA señaló que aproximadamente 5,5 millones de personas (la mitad de la población del país) requerían asistencia humanitaria.

## ÁFRICA

**CHAD:** La muerte del opositor y primo del presidente, Yaya Dillo, evidencia tensiones en la élite en el poder de cara a las elecciones presidenciales

**ETIOPÍA:** Incremento de las hostilidades en Amhara y en Oromiya y tensiones como consecuencia de la lenta implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y Tigré

**GHANA, UGANDA Y GAMBIA:** Retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas y el colectivo LGTBIQ+

**MALÍ:** La Junta Militar da por cerrado el Acuerdo de Argel de 2015 y anuncia un nuevo diálogo nacional para la paz y la reconciliación

**RDC:** Se agrava la situación en los diferentes focos de violencia en el país en paralelo a la apertura de una ventana de diálogo con Rwanda

**SAHEL OCCIDENTAL:** Níger, Burkina Faso y Malí anuncian su retirada inmediata de la CEDEAO

**SUDÁN:** La ONU advierte que la guerra en Sudán corre el riesgo de desencadenar la mayor crisis de hambre del mundo

**SUDÁN DEL SUR:** Kenya asumirá la mediación en las conversaciones de paz en Sudán del Sur

### CHAD

#### La muerte del opositor y primo del presidente, Yaya Dillo, evidencia tensiones en la élite en el poder de cara a las elecciones presidenciales

El 28 de febrero se produjo la muerte de Yaya Dillo, primo del presidente de transición Mahamat Déby y líder del opositor Partido Socialista sin Fronteras (PSF), como consecuencia de un tiroteo por parte de las fuerzas de seguridad en la sede del partido en la capital, N'Djamena. El fallecimiento del candidato provocó especulaciones sobre las circunstancias de su deceso y divisiones dentro de la élite gobernante. La muerte de Dillo se produjo un día después del anuncio del adelanto de las elecciones presidenciales para el 6 de mayo, en lugar de octubre como estaba previsto, con una segunda vuelta el 22 de junio. El 1 de marzo, el Gobierno insistió en que Dillo fue asesinado mientras se resistía a un arresto legal, pero el mismo día la oposición calificó el caso como una ejecución. Según fuentes locales, el 1 de marzo las autoridades demolieron la sede del PSF, eliminando potencialmente pruebas, y aunque el primer ministro Succès Masra el 4 de marzo prometió una investigación internacional independiente, las informaciones seguían siendo confusas.

A principios de febrero, el general Saleh Déby -tío del mandatario de transición y hermano del difunto presidente Idriss Déby-, había abandonado el partido gobernante, Movimiento Patriótico de Salvación (MPS), para unirse al PSF, dirigido por Yaya Dillo. La desertión, junto con las expresiones de disidencia de otros miembros del clan zaghawa (el grupo étnico del difunto expresidente Idriss Déby, padre de Mahamat Déby), aumentaron las tensiones dentro de la élite gobernante. Según los informes, el 27 de febrero los servicios de inteligencia arrestaron e hirieron a un alto cargo del PSF, Ahmed Torabi, acusándolo de intento de asesinato contra el presidente del Tribunal Supremo. Los familiares de la víctima durante la noche del 27 al 28 de febrero supuestamente intentaron asaltar la Agencia Nacional de Seguridad del Estado en N'Djamena. Después de que intervinieran las fuerzas de seguridad, el gobierno dijo que la situación estaba “bajo control” y confirmó

varias muertes, según señalaron diversas fuentes. El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad rodearon la sede del PSF en la capital, desencadenando un intenso tiroteo; las autoridades dijeron más tarde que Yaya Dillo y otras doce personas habrían muerto en el intercambio de disparos, mientras que el general Saleh Déby había sido arrestado.

Como consecuencia de este anuncio de avance electoral y de la muerte del líder opositor Yaya Dillo, la oposición ha acelerado sus intentos de proponer un candidato que pueda competir contra Mahamat Déby. El 24 de marzo el Tribunal Constitucional aprobó a 10 candidatos y excluyó a otros 10, entre los cuales dos importantes opositores, Nassour Ibrahim Neguy Coursami y Rakhis Ahmat Saleh, por supuestas irregularidades en sus candidaturas. El actual presidente de la transición, Mahamat Déby, tal y como estaba previsto, se presentará a las elecciones, y también su actual primer ministro y antiguo líder opositor, Succès Masra.

### ETIOPÍA

#### Incremento de las hostilidades en Amhara y en Oromiya y tensiones como consecuencia de la lenta implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y Tigré

En la primera parte del año se incrementaron las hostilidades en la región de Amhara. El anuncio en abril de 2023 por parte del Gobierno Federal de desarmar y disolver las fuerzas especiales en todo el país y en específicamente las fuerzas especiales amhara y las milicias amhara Fano desencadenó una escalada de los enfrentamientos entre éstas y los cuerpos de seguridad federales. La violencia se agravó en agosto y siguió aumentando durante la última parte del año y sobre todo durante el primer trimestre de 2024, cuando las hostilidades alcanzaron las principales ciudades de la región. Las milicias Fano atacaron entre el 29 de febrero y el 1 de marzo la capital regional, Bahir Dar, llevando a cabo bombardeos con armamento pesado y causando diversas víctimas mortales. Según señaló International

Crisis Group (ICG), Fano confirmó el secuestro de 270 jóvenes de la Región de las Comunidades y los Pueblos del Sur de Etiopía supuestamente vinculados con las fuerzas gubernamentales. Desde finales de febrero se ha informado de **enfrentamientos en las zonas de Gojjam Oeste y Norte, Shewa Norte y Wollo Norte**, con cortes y bloqueos de carreteras, y los enfrentamientos se han extendido a las localidades de Gondar, Merawi, Dega Damot, Shewa Robit, Antsokiyana Gemza y Lalibela. Por otra parte, los combates entre los cuerpos de seguridad y el grupo armado OLA en Oromiya continuaron y, en paralelo, también se intensificaron los enfrentamientos entre milicias amhara y milicias oromo, en concreto entre el 9 y el 21 de marzo en la Zona Especial Oromo de la región de Amhara y en la Zona Shewa Norte, donde murieron decenas de personas, tal y como señalaron el ICG y ACLED.

Por último, surgieron tensiones como consecuencia de la lenta implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y los líderes de Tigré. Durante el año 2023 el Gobierno Federal y el movimiento político-militar de la región continuaron poniendo en práctica las disposiciones del acuerdo de paz de noviembre de 2022, a pesar de la fragilidad de la situación, de las vulneraciones de los derechos humanos y la hambruna que seguía afectando a la región. En este sentido, el **Gobierno Federal y el liderazgo político de Tigré expresaron su compromiso con el acuerdo de paz de Pretoria** en el marco de la Primera Revisión Estratégica celebrada bajo los auspicios de la UA en Addis Abeba el 11 de marzo. En la reunión participaron representantes del Gobierno Federal, de la Administración Interina del Tigré (TPLF), y observadores de la ONU, UE, IGAD, EEUU y del Banco de Desarrollo Africano, y fue facilitada por el Panel de Alto Nivel de la UA para el Proceso de Paz Etíope. El presidente de la **Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat**, señaló que a pesar de los importantes avances realizados hasta el momento, existen temas importantes que requieren atención urgente, como es el proceso de diálogo político, la justicia transicional y el Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). Además, también señaló la necesidad de consolidar los pasos alcanzados. Sin embargo, el TPLF manifestó su preocupación sobre la creciente desconfianza entre las partes debido a la lentitud de la implementación del proceso de paz, principalmente en lo concerniente a los territorios en disputa y a la retirada de las tropas de Amhara y de Eritrea de la región. Además, la administración provisional de la región de **Tigré acusó a la región de Amhara de incorporar territorio de Tigré** (en referencia a los territorios en disputa entre ambas administraciones) en el currículum educativo y mapas.

## GHANA, UGANDA Y GAMBIA

### Retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas y el colectivo LGTBIQ+

El parlamento de **Ghana aprobó por unanimidad el 28 de febrero una legislación que intensifica la represión de los derechos de las personas LGTBIQ+** y de quienes

promueven identidades sexuales o de género no convencionales en el país. El Proyecto de Ley para la Promoción de los Derechos Sexuales Adecuados y los Valores Familiares fue presentado en agosto de 2021 por un diputado del opositor Congreso Nacional Democrático (NDC). La legislación vigente ya castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con tres años de cárcel, y el nuevo proyecto de ley incluye una pena de prisión de hasta cinco años por la “promoción, patrocinio o apoyo intencional de actividades LGTBIQ+”. Tras su votación en el parlamento, **el proyecto de ley se presentó al presidente Nana Akufo-Addo**, quien en sus primeros comentarios sobre la aprobación de la ley afirmó que Ghana no retrocederá en su historial de derechos humanos y añadió que la norma había sido impugnada ante el Tribunal Supremo. La oficina del presidente informó que esperaba el resultado de las impugnaciones legales antes de que la ley llegue a Akufo-Addo para su ratificación. Su promulgación también podría descarrilar la ayuda internacional para el país de 3.800 millones de dólares en financiación del Banco Mundial, así como el paquete de préstamos del FMI de 3.000 millones de dólares, según afirmó el Ministerio de Finanzas. El presidente del Parlamento, Alban Bagbin, notificó a los legisladores que la negativa de la presidencia a recibir el proyecto de ley era inconstitucional y que **el Parlamento a su vez bloqueará**, hasta que el presidente no ratifique la ley, los procedimientos de aprobación de unos 21 candidatos para puestos ministeriales y viceministeriales.

En **Uganda**, la ley que afianzaba la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo aprobada por el Parlamento el 21 de marzo de 2023 y **ratificada meses después por el presidente Yoweri Museveni**, volvió a ser **ratificada por el Tribunal Constitucional a principios de abril de 2024, negándose el alto tribunal a revocarla**. Activistas ugandesas habían impugnado la ley ante los tribunales, debido a que la norma permite la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. La ley define la “homosexualidad agravada” como casos de relaciones homosexuales con un menor u otras categorías de personas vulnerables, o cuando la persona implicada está infectada con el VIH. La aprobación de la ley había provocado una amplia condena a nivel internacional. El presidente de EEUU, Joe Biden, condenó la medida como una “trágica violación” de los derechos humanos, anunciando restricciones de visado a personas que “socavan el proceso democrático” en Uganda y excluyó al país de la iniciativa comercial africana por violaciones de los derechos humanos. El Banco Mundial congeló nuevos préstamos a Uganda en agosto, provocando que el la moneda local, el shilling ugandés, cayera a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi ocho años. Desde la aprobación de la ley, según **ha documentado la ONG ugandesa Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF)** se habían producido 55 detenciones, tres penas de muerte remitidas al director de la Fiscalía, ocho exámenes anales forzados, 254 desalojos de personas acusadas de ser LGBTI o estar relacionadas con personas LGBTI y otros 202 casos de violencia real o amenaza de violencia.

Por otro lado, el 18 de marzo, el Parlamento de **Gambia** aprobó en primera fase un proyecto de ley para derogar la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF). Esta medida había sido decretada en 2015 por el entonces presidente Yahya Jammeh, quien introdujo elevadas multas y penas de cárcel para los autores de MGF. Después de debatir el proyecto de ley, los legisladores votaron por 42 a cuatro para enviarlo a un comité parlamentario para su revisión. El comité puede hacer enmiendas al proyecto de ley y se espera que lo envíe de nuevo a la Asamblea Nacional para su votación, un procedimiento de rutina que suele durar al menos tres meses. **Si se aprueba el proyecto de ley, Gambia se convertiría en el primer país en revertir la prohibición de la mutilación genital femenina.** Múltiples organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado el retroceso que significaría la ley. **Amnistía Internacional, UNICEF o UNFPA** denunciaron que la mutilación genital femenina atenta contra el derecho de las niñas y las mujeres a la salud y la integridad corporal y que su legalización representaría una violación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, todas las cuales Gambia ha ratificado. También denunciaron que su aprobación violaría el principio de “igual dignidad de la persona” garantizado en la Constitución de Gambia.

## MALÍ

### La Junta Militar da por cerrado el Acuerdo de Argel de 2015 y anuncia un nuevo diálogo nacional para la paz y la reconciliación

Tras el reinicio de los enfrentamientos armados en agosto de 2023 entre las Fuerzas Armadas malienses –apoyadas por los paramilitares del Grupo Wagner–, con los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí de 2015, conocido como el Acuerdo de Argel, la situación de seguridad en el norte de Malí se ha deteriorado significativamente. La toma de la ciudad de Kidal en noviembre de 2023 por parte de las Fuerzas Armadas –que desde el año 2012 había significado el bastión de los grupos rebeldes– marcó el inicio de un nuevo conflicto en el país. El reinicio de las hostilidades provocó que, el 25 de enero, la Junta Militar maliense **declarase oficialmente** la “inaplicabilidad absoluta” y la terminación inmediata del Acuerdo de Argel, dando el mismo por finalizado. Paralelamente, acusó a Argelia, que ha fungido como mediador, de interferir en sus asuntos internos. Un día después, la Junta Militar emitió un decreto para establecer un comité para **organizar nuevas conversaciones de paz y reconciliación** a nivel nacional, sin determinar un calendario ni qué actores participarían en el diálogo. Este decreto se vincula con el anuncio realizado a principios de 2023 por el coronel Assimi Goïta, líder de la Junta, en el cual declaró el establecimiento de un diálogo directo entre malienses para “priorizar la propiedad nacional del proceso de paz”. Al respecto, Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz

de la coalición rebelde Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés), que aglutina a los grupos signatarios del Acuerdo de Paz de 2015, denunció que la nueva iniciativa era un “evento preparado” entre grupos que ya están alineados con el Gobierno. Ramadane también reconoció la terminación del acuerdo de paz de 2015 y solicitó a sus miembros actualizar sus objetivos a la luz de la nueva situación.

## REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

### Se agrava la situación en los diferentes focos de violencia en el país en paralelo a la apertura de una ventana de diálogo con Rwanda

Cuando se cumplen 30 años del genocidio de Rwanda de 1994, unos hechos que han marcado la historia africana y mundial y que se han convertido en uno de los fracasos más importantes de la comunidad internacional en lo concerniente a su responsabilidad de cara a garantizar la paz y la seguridad internacionales, persiste el deterioro de la situación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza. En el empeoramiento de las relaciones también influyen las acusaciones hacia Rwanda –evidenciadas por **Naciones Unidas**– de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte, iniciada a finales de 2021 y que **entre febrero de 2022 y enero de 2024 ha provocado el desplazamiento forzado de 2 millones de personas.** Solo en el mes de febrero se desplazaron otras **250.000 personas, según la ONU,** y los principales enfrentamientos a finales de marzo tenían lugar alrededor de Sake, la principal localidad y barrera en el camino del M23 hacia Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte. No obstante, cabe destacar que a principios de marzo el presidente ruandés, **Paul Kagame, confirmó su disposición a implicarse en conversaciones de paz con su homólogo congolés, Félix Tshisekedi,** con el objetivo de hacer frente a la crisis que padece el este de RDC. Este anuncio se produce tras los esfuerzos mediadores liderados por el Gobierno de Angola, encabezados por el presidente João Lourenço en su cargo como mediador de la UA en la crisis de RDC, en el conocido como proceso de Luanda. El acuerdo se alcanzó tras una reunión en Luanda entre el presidente de Angola y su homólogo ruandés, según informó el ministro de Exteriores de Angola, Tete Antonio, que destacó que se produciría el encuentro con Tshisekedi en el momento que determinara el mediador oficial. Angola ha estado trabajando activamente con delegaciones ministeriales de ambos países para conseguir este paso. Sin embargo, antes del acuerdo, Tshisekedi había exigido la retirada de las tropas ruandesas de territorio congolés como precondition para celebrar la reunión, condición que fue vehemente rechazada por Rwanda, ya que ésta niega cualquier participación en el conflicto.

No obstante, a esta grave situación se sumó la contienda electoral celebrada el pasado 20 de diciembre, marcada por un clima de violencia política y de instrumentalización

de la retórica belicista contra Rwanda. Las elecciones se vieron plagadas de irregularidades y fueron calificadas de “catástrofe electoral” por la principal organización local que supervisó las elecciones, la Conferencia Episcopal congoleña. El 20 de enero era reelegido presidente Félix Tshisekedi, quien en abril ha nombrado una primera ministra, Judith Suminwa Tuluka, en lo que ha pretendido defender como un cambio en la política en favor de la igualdad de género en el país.

Esta escalada de la violencia en Kivu Norte y Sur del M23 y del resto de milicias locales y con agendas en Burundi y Rwanda, se añade a la persistencia de las acciones de otras insurgencias locales y regionales en el este del país –principalmente, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que reivindican una agenda próxima al yihadismo– y en el oeste, en el territorio de Kwamouth, en la provincia de Mai-Ndombe, conflicto intercomunitario por la propiedad y usos de la tierra que se intensificó en 2023 y se extendió a las provincias vecinas de Kwango, Kwilu, Kinshasa y Kongo Central. La mayor parte de la violencia permanece concentrada en la zona occidental de las provincias de Kwilu y de Mai-Ndombe, cerca del territorio Kwamouth. Los cuerpos de seguridad congoleños cerraron la principal arteria que comunica la ciudad de Bandundu (capital de Kwilu) con Kinshasa en enero debido a la inseguridad creciente y al incremento de saqueos por parte de las milicias mobondo.

## SAHEL OCCIDENTAL

### Níger, Burkina Faso y Malí anuncian su retirada inmediata de la CEDEAO

Malí, Níger y Burkina Faso, dirigidos todos por juntas militares que han llegado al poder a través de golpes de Estado entre 2022 y 2023, emitieron el 28 de enero una declaración conjunta acusando a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de doblegarse ante “potencias extranjeras” y de aplicarles “sanciones ilegales, ilegítimas, inhumanas e irresponsables”. En el comunicado también anunciaron su salida inmediata del organismo regional, aunque su protocolo requiere hasta un año para el proceso de retirada. La CEDEAO, en la reunión extraordinaria de su Consejo de Mediación y Seguridad celebrada en Abuja el 8 de febrero, respondió a la retirada anunciada de los tres países miembros, afirmando que estos deben cumplir los requisitos del tratado de retirada antes de que se apruebe su salida. El 24 de febrero, los líderes de la CEDEAO reunidos en Abuja en una cumbre de emergencia anunciaron que levantarían las sanciones contra Níger, Malí y Guinea, aunque no hicieron mención de las sanciones impuestas a Burkina Faso. Medios locales afirmaron que la flexibilización de las sanciones impuestas tras los golpes militares en los tres países entre 2020 y 2023 pretendía ser un gesto de apaciguamiento para animar a los países a reconsiderar su retirada del bloque regional. Posteriormente, Níger, Malí y Burkina Faso, que en septiembre de 2023 habían formado la Alianza de Estados del Sahel (AES), anunciaron el 6

de marzo la creación de una fuerza militar conjunta para combatir la escalada de violencia en la región del Sahel. Esta medida se produce tras la retirada de los tres países de la Fuerza Conjunta del G5 para el Sahel.

Por otro lado, las tensiones entre las juntas militares y los exsocios occidentales se mantuvieron. La Junta Militar de Níger, que había solicitado en diciembre el fin de la misión EUCAP Sahel de la Unión Europea, creada en 2012 para mejorar la seguridad interna, deportó a 15 soldados franceses y a otros ciudadanos europeos, lo que provocó un aumento de las tensiones diplomáticas con la UE. También las autoridades nigerinas prohibieron la entrada a los viajeros de nacionalidad francesa en su territorio. El aumento de estas tensiones entre la UE y los exsocios del Sahel, provocó que la UE no renovase la misión de entrenamiento militar que en Malí (EUTM Malí) que concluirá definitivamente el próximo 18 de mayo. Níger también anunció la ruptura del acuerdo de seguridad que mantenía con Estados Unidos desde 2012. El anuncio se produjo después de una visita a la capital, Niamey, de la subsecretaria de Estado estadounidense Molly Phee, máxima funcionaria del Departamento de Estado para Asuntos Africanos, y el general Michael E. Langley, quien dirige las operaciones militares estadounidenses en África. Phee dijo que había enfatizado la importancia de una rápida transición democrática para el Gobierno de Níger, diciendo que la asistencia de Estados Unidos permanecería suspendida hasta que Níger estableciera un cronograma para restaurar la democracia, algo que el país no ha hecho.

Finalmente, las fuerzas de seguridad de Burkina Faso y Malí siguieron recibiendo acusaciones de cometer violaciones a los derechos humanos en sus operaciones antiterroristas. Human Rights Watch reportó que soldados malienses arrestaron y dispararon a decenas de personas, mientras que un informe de AP documentó el asesinato de decenas de civiles a manos de las fuerzas de seguridad de Burkina Faso en la comunidad de Zaongo en noviembre.

## SUDÁN

### La ONU advierte que la guerra en Sudán corre el riesgo de desencadenar la mayor crisis de hambre del mundo

Durante el mes de enero, altos cargos del Ejército de Sudán (FAS) y las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF) se reunieron tres veces en Bahrein bajo la facilitación de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Este evento significó el primer contacto de este nivel entre las partes en nueve meses de conflicto, ya que las conversaciones celebradas el año pasado en la ciudad saudí de Jeddah tuvieron un nivel inferior de representación de las partes. Posteriormente Martin Griffiths, secretario general adjunto de la ONU, informó de un acuerdo entre las partes para discutir la implementación de la entrega de ayuda humanitaria en virtud del Acuerdo de Jeddah, invitando a celebrar una siguiente ronda de conversaciones en Suiza.

Sin embargo, el Gobierno sudanés reiteró su compromiso de negociar únicamente a través del **formato que se desarrolla en Jeddah** bajo mediación de Arabia Saudita y Estados Unidos. A finales de marzo, Tom Perriello, recientemente nombrado enviado especial de Estados Unidos para Sudán, informó como fecha de **reanudación de las conversaciones de paz en Jeddah el próximo 18 de abril**. Perriello declaró que la intención es que las conversaciones sean inclusivas, involucrando a la Unión Africana, el bloque de África Oriental IGAD, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, en un intento por cohesionar los diferentes esfuerzos mediadores que se desarrollan de forma paralela desde que inició el conflicto armado en abril de 2023. La prioridad de las conversaciones reside en asegurar un acuerdo de paz que ponga fin de inmediato a la violencia, garantice el pleno acceso humanitario a todos los ciudadanos y facilite el regreso del país a un gobierno civil.

Paralelamente al impulso de las conversaciones de paz, la guerra prosigue ocasionando un importante impacto en la población sudanesa, ampliando la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. Al respecto, un **informe del grupo de expertos de la ONU en Sudán** denunció que las RSF y sus milicias aliadas han llevado a cabo asesinatos étnicos y violaciones generalizadas en su ofensiva sobre Darfur occidental, lo que podría constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció la denegación deliberada y sistemática de acceso seguro a las agencias humanitarias en el país, hecho que **podría equivaler a un crimen de guerra**. Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió en marzo que 18 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria y el 10% de la población, **cerca de cinco millones de personas, están al borde de la catástrofe**. Solo en Darfur, millones de personas se encuentran en riesgo de morir de hambre después de la decisión del Gobierno sudanés de prohibir la entrega de ayuda humanitaria a través de Chad. El PMA denunció que la guerra en Sudán corre el riesgo de desencadenar **la mayor crisis de hambre del mundo**.

## SUDÁN DEL SUR

### Kenya asumirá la mediación en las conversaciones de paz en Sudán del Sur

A finales de diciembre de 2023, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, **solicitó al Gobierno de Kenya que asumiera el papel de mediación en las conversaciones de paz** entre su Gobierno y los grupos armados no signatarios del acuerdo de paz de 2018 organizados en la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA), que hasta la fecha se estaban desarrollando en Roma bajo la mediación de la Comunidad de Sant'Egidio. La solicitud se debió a la falta de avances después de cuatro años de negociaciones en Roma. En enero, Sudán del Sur envió a Kenya a los enviados especiales, el general Akol Koor Kuc y el general Simon Makuac Yen, que se reunieron con el presidente William Ruto. Posteriormente, Ruto se reunió con representantes de la Comunidad de Sant'Egidio en Roma, en el marco de la Cumbre Italia-África celebrada en Roma. Ruto aceptó hacerse cargo de la mediación y transferir el proceso a Nairobi –quien ya funge como garante del Acuerdo de Paz Revitalizado en Sudán del Sur de 2018– anunciando que trabajaría estrechamente con los antiguos mediadores. Sin embargo, las dudas que plantea la decisión por parte de algunos grupos armados que conforman SSOMA, tachándola de unilateral por parte del Gobierno sursudanés, amenazan el reinicio de las conversaciones. **Estos grupos han exigido que regresen primero a Roma para decidir si todas las partes confían en la mediación del presidente keniano**. Pagan Amum, líder del Real-SPLM, se mostró escéptico con la decisión y señaló que la razón por la que las conversaciones se trasladaron a Nairobi fue porque SSOMA había insistido en abordar las causas del conflicto, un tema con el que Juba se siente incómodo.

SSOMA es una coalición de grupos armados en Sudán del Sur conformada por el National Democratic Movement Patriotic Front (NDM-PF) dirigido por Emmanuel Ajawin, el National Salvation Front (NAS) de Thomas Cirillo, el South Sudan United Front (SSUF) encabezado por Paul Malong y el Real-SPLM dirigido por Pagan Amum. Todos estos grupos se negaron a firmar el acuerdo de paz revitalizado de 2018 bajo el paraguas de la SPLA-IO dirigido por Riek Machar. Desde el inicio de las conversaciones de paz de Roma en el año 2020, las mismas se han prolongado durante cuatro años sin mucho éxito debido, entre otros factores, a una serie de divisiones dentro de los movimientos opositores.

## AMÉRICA

**COLOMBIA:** Las diferentes negociaciones de paz atraviesan importantes crisis a pesar de los avances y se abre un nuevo escenario de diálogo con la Segunda Marquetalia

**EL SALVADOR:** La abrumadora victoria del presidente Bukele en las elecciones presidenciales, legislativas y locales provoca una concentración de poder sin precedentes y acrecienta temores sobre una deriva autoritaria del país

### COLOMBIA

#### Las diferentes negociaciones de paz atraviesan importantes crisis a pesar de los avances y se abre un nuevo escenario de diálogo con la Segunda Marquetalia

Las diferentes negociaciones de paz abiertas en Colombia continuaron avanzando y se alcanzaron algunos acuerdos relevantes, aunque el Gobierno enfrentó diferentes obstáculos que pusieron en riesgo la continuidad de los diálogos. **El Gobierno de Colombia y el ELN acordaron el 5 de febrero prorrogar por 180 días el acuerdo de alto el fuego** que habían pactado inicialmente por seis meses y que estaba vigente desde agosto de 2023, lo que elevaría a un año la duración de dicho alto el fuego. Se trata de un avance positivo, ya que permitía consolidar lo avanzado en las negociaciones en los ciclos previos y afianzar la confianza entre las partes, aunque no vino acompañado de decisiones encaminadas a la terminación del conflicto armado. El acuerdo incluyó también el compromiso por parte del grupo armado suspender por seis meses las “retenciones de carácter económico”, terminología que utiliza el ELN para referirse al secuestro. Con este acuerdo concluyó el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana. Además, el Gobierno anunció el establecimiento de un fondo multidonante que permitirá sostener económicamente lo acordado en la mesa de negociaciones. No obstante, pocos días después del anuncio de acuerdo, el ELN señaló que el proceso de diálogo entraba en una “fase de congelamiento” con acusaciones al Gobierno colombiano de estar organizando un proceso de participación en Nariño paralelo al pactado en la mesa. La crisis se habría iniciado después de que el gobernador de Nariño anunciara unos diálogos regionales con la estructura del ELN conocida como “comuneros del sur”, quienes habrían solicitado unirse al proceso de paz total a través de este formato. Esta situación puso en evidencia la falta de unidad en el ELN, así como la fragilidad del proceso, que a pesar de avances importantes como la prolongación del alto al fuego, sigue expuesto a crisis de forma periódica. A finales de febrero **ambas partes anunciaron un acuerdo** para proseguir las negociaciones tras una reunión mantenida a instancias de los países garantes y acompañantes permanentes y señalaron que dirimirían sus diferencias en el marco de la próxima ronda de negociaciones prevista para abril en Venezuela. En este sentido se pronunció la jefa negociadora de la delegación gubernamental en el proceso, que señaló que el problema entre ambas delegaciones había quedado resuelto.

Por otra parte, **en febrero se anunció la apertura de un tercer proceso de negociaciones** en Colombia, con el

inicio del diálogo con el grupo conocido como Segunda Marquetalia, procedente de las extintas FARC y liderado por Iván Márquez, quien ya fuera negociador con las FARC en el proceso que culminó con la firma del acuerdo de paz de 2016. Las negociaciones con la Segunda Marquetalia han generado recelos en diferentes sectores de la política colombiana, que han apuntado a que validan el mensaje de que los acuerdos de paz se pueden incumplir sin consecuencias, puesto que Márquez abandonó el proceso de implementación del acuerdo de paz de 2016 para volver a la insurgencia armada. **Las partes solicitaron los buenos oficios de Noruega, Cuba y Venezuela** para las negociaciones, así como el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y del Representante del secretario general de la ONU en el país, actores todos ellos involucrados activamente en las demás negociaciones de paz actualmente activas en Colombia. En abril, el Alto Comisionado para la Paz señaló que se estaba a la espera de que la fiscalía levantase las órdenes de captura contra los dirigentes del grupo armado para poder dar comienzo a las conversaciones. El presidente Petro nombró al exconsejero del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa como jefe negociador con este grupo disidente de las FARC. Igualmente firmó en febrero un decreto para que ocho miembros de la Segunda Marquetalia participen en la futura mesa de diálogos de paz con el Gobierno. Entre los nombres de las personas que se espera que conformen la delegación de la Segunda Marquetalia en los diálogos están alias ‘Zarco Aldinever’ y ‘Walter Mendoza’, considerados hombres de confianza de ‘Iván Márquez’.

Finalmente, cabe destacar que aunque se celebraron dos nuevos ciclos de negociación con el grupo armado Estado Mayor Central, en marzo el presidente Petro ordenó la suspensión del alto el fuego acordado con este grupo, después de un ataque por parte del grupo armado contra un grupo de indígenas en el Toribío, a consecuencia del cual murió una lideresa indígena. El ataque se produjo a pesar de que ambas partes habían acordado la prolongación del alto el fuego hasta el 15 de julio. Tras la suspensión del alto el fuego el grupo amenazó con llevar a cabo más ataques, si bien ambas partes habían acordado con posterioridad a la crisis retomar las negociaciones. Así pues, el escenario era de enorme complejidad y obstáculos importantes en las diferentes negociaciones de paz en curso en Colombia, si bien los canales de comunicación entre las partes se hallaban abiertos y el acompañamiento de las terceras partes contribuyó a superar algunas de las crisis más destacables.

## EL SALVADOR

### La abrumadora victoria del presidente Bukele en las elecciones presidenciales, legislativas y locales provoca una concentración de poder sin precedentes y acrecienta temores sobre una deriva autoritaria del país

El presidente, Nayib Bukele, y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una victoria sin precedentes en las elecciones presidenciales y legislativas (celebradas el 4 de febrero) y locales (que tuvieron lugar el 3 de marzo). En las elecciones presidenciales, a las que Bukele concurrió a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección, este obtuvo más del 88% de los votos. En las elecciones legislativas, el partido Nuevas Ideas logró 54 de los 60 escaños en liza. En junio de 2023, la Asamblea Legislativa –en la que Nuevas Ideas ya contaba con un sólida mayoría– redujo de 84 a 60 el número de escaños, provocando en su momento críticas sobre la presunta intención de Bukele de concentrar el poder. En las elecciones locales celebradas a principios de marzo, Nuevas Ideas logró 28 de las 44 alcaldías en liza, mientras que cuatro partidos aliados de Bukele lograron 15 de las 16 alcaldías restantes. Igual en el caso del poder legislativo, en la anterior legislatura el Parlamento redujo el número de municipios de 262 a 44, nuevamente provocando críticas de numerosos sectores de la oposición. En cuanto a las elecciones presidenciales y legislativas, celebradas el mismo día, varios partidos de la oposición solicitaron la anulación de los comicios alegando que se habían producido decenas de irregularidades durante el escrutinio, pero el Tribunal Electoral desestimó tales alegaciones. La misión de observación electoral de la OEA señaló que el proceso electoral había sido deficiente, pero a la vez declaró que los resultados reflejaban la voluntad mayoritaria del electorado.

Además de las denuncias de fraude electoral, en el primer trimestre de 2024 numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron la deriva autoritaria del Gobierno y las consecuencias del estado de excepción impuesto en marzo de 2022 poco después de que 87 personas fueran asesinadas en tres días. A principios de abril, la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que en los dos años transcurridos desde la imposición de esta medida excepcional se había detenido arbitrariamente a 26.250 personas que no habían cometido ningún delito, y se

habían registrado 241 muertes en las cárceles. SJH declaró disponer de casi 500 denuncias de muertes en centros penales, pero que solamente había podido confirmar 241 decesos, el 94% de los cuales fue de personas que no pertenecían a ninguna mara. La ONG denunció que el Estado salvadoreño había cometido crímenes de lesa humanidad porque el 44% de los fallecimientos fueron muertes violentas (torturas) y otro 29% por falta de atención médica. Por su parte, Amnistía Internacional señaló que a fecha de febrero de 2024 se habían documentado 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78.000 detenciones arbitrarias y 235 muertes bajo custodia y acusó al Gobierno de reducir la violencia ejercida por las maras reemplazando la violencia ejercida por el Estado. En la misma línea, a principios de abril, siete organizaciones de la sociedad civil (Amate, Azul Original, CRISTOSAL, FESPAD, IDHUCA, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y SSP) denunciaron que desde la imposición del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 hasta el 15 de marzo de 2024 se habían registrado 6.305 denuncias de violaciones de los derechos humanos que implicaban 16.289 afectaciones o hechos, por lo que exigieron al Gobierno la derogación de dicha medida.

Por su parte, a principios de abril, el ministro de Seguridad dijo que desde la imposición del estado de excepción se habían arrestado a 79.184 personas pertenecientes a las maras, lo que representaba el 75% del total. Según dicho ministro, quedarían por arrestar a unos 25.000 miembros de las maras, aunque reconoció que muchas de estas personas ya no se encuentran dentro del país. Una investigación de InSight Crime estimó que en marzo de 2022 había casi 120.000 pandilleros, unos 78.000 de la Mara Salvatrucha y unos 41.000 entre las dos facciones de la Barrio 18. En materia de lucha contra las maras, a principios de febrero se inició un juicio masivo contra 492 líderes de la Mara Salvatrucha, que fue criticado por numerosas organizaciones de derechos humanos que consideran que se estaba violando el debido proceso y el derecho de dichas personas a una defensa legal. En enero, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal que facultará al Fiscal General para designar como terroristas a personas y entidades, y también para solicitar su inclusión en la lista terrorista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

## ASIA Y EL PACÍFICO

**MYANMAR:** Escala la violencia, mientras el régimen da signos de debilidad militar

**PAKISTÁN – AFGANISTÁN:** Se incrementa gravemente la tensión entre los países vecinos

**PAPÚA NUEVA GUINEA:** El Gobierno anuncia un acuerdo de cese de hostilidades entre las dos alianzas tribales involucradas en uno de los peores episodios de violencia en la historia reciente del país

**TAILANDIA:** Tras un año de parálisis en el proceso de paz, el Gobierno y el grupo armado BRN alcanzan un acuerdo para tratar de reducir los niveles de violencia en el sur del país y explorar soluciones políticas al conflicto

### MYANMAR

#### Escala la violencia, mientras el régimen da signos de debilidad militar

Tras la escalada de la violencia en el país como consecuencia de la acción conjunta de varios grupos armados en octubre, conocida como Operación 1027, que dio lugar al mayor repunte en el conflicto armado desde el golpe de Estado de 2021, persistieron los enfrentamientos armados entre diferentes grupos insurgentes y las fuerzas armadas, que estarían dando muestra de un debilitamiento en su capacidad militar de hacer frente a la insurgencia. Además, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés) señaló que se habían llevado a cabo **varios ataques armados con drones contra objetivos militares en la capital** del país, Naypyitaw. La acción con drones, que fue reivindicada por el grupo Shar Htoo Waw, estaba dirigida contra la casa del jefe de la Junta Militar que gobierna desde el golpe de 2021, Min Aung Hlaing, así como contra el cuartel general de las Fuerzas Armadas y una base aérea. La Junta señaló que se habían interceptado los drones. El ataque con drones representaba una nueva muestra de que la oposición al régimen se estaría fortaleciendo, frente a un debilitamiento progresivo de la Junta Militar, cuya mayor evidencia fue el éxito de la Operación 1027. En los últimos meses, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de **deserciones masivas en las filas militares birmanas**, ante lo que el régimen respondió reactivando una legislación sobre **conscripción militar obligatoria**. Según algunos análisis, las Fuerzas Armadas birmanas, o Sit Tat –como son popularmente conocidas–, estarían integradas por 130.000 efectivos, un número considerablemente inferior al de entre 300.000 y 400.000 soldados que se estimaba con anterioridad al golpe de Estado. Con esta nueva ley se pretende aumentar el número de soldados en 60.000 al año. El abandono de las Fuerzas Armadas, que se incrementó tras el golpe de Estado de 2021, se habría acelerado nuevamente tras la Operación 2021, lo que facilitó que los grupos insurgentes que la protagonizaron tomaran el control de diferentes ciudades con cierta rapidez.

Por otra parte, el **estado de Rakhine ha sido el epicentro de los enfrentamientos** más intensos de los últimos meses y desde noviembre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición Arakan Army (AA) se han enfrentado por el control del estado. Tras la Operación 1027, que mostró

las importantes capacidades operativas de los grupos insurgentes que la lideraron, así como la debilidad de las fuerzas de seguridad birmanas, otros grupos armados aprovecharon esta situación para iniciar operaciones en otras zonas del país. Desde noviembre, el AA ha logrado tomar el control de varias ciudades del estado, incluyendo Ramree, algunas de ellas cercanas a proyectos estratégicos chinos desarrollados en la zona. Esta escalada de la violencia, que se produjo tras la ruptura de un alto el fuego vigente desde el año anterior, ha ocasionado el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas en el estado. El grupo armado AA acusó a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo ataques deliberados contra la población civil. También en el estado Kachin se produjeron avances importantes del grupo armado KIA, que capturó varios emplazamientos militares. Por su parte, **OCHA alertó de la grave situación humanitaria** que atravesaba la población civil en estos dos estados como consecuencia del incremento de la violencia y los enfrentamientos armados en los últimos meses, así como los 2,8 millones de personas desplazadas en el país como consecuencia de la violencia.

### PAKISTÁN - AFGANISTÁN

#### Se incrementa gravemente la tensión entre los países vecinos

La tensión escaló entre Pakistán y Afganistán como consecuencia de **dos ataques aéreos nocturnos** llevados a cabo por Pakistán el 18 de marzo en territorio afgano que causaron la muerte de ocho personas. Esta escalada evidenció el preocupante deterioro de las relaciones entre ambos países, que se ha acentuado en los últimos meses como consecuencia de la intensificación de la violencia talibán en Pakistán. Las autoridades afganas señalaron que en el ataque pakistaní habían muerto cinco mujeres y tres menores. Los ataques se produjeron en las provincias afganas de Paktika y Khost, situadas en el este del país. El ministro de Exteriores pakistaní señaló que el ataque se había producido “contra terroristas pertenecientes al grupo Hafiz Gul Bahadur que, junto al TTP, es responsable de múltiples atentados en Pakistán que han resultado en la muerte de cientos de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad”. La acción militar pakistaní tuvo lugar dos días después de un ataque por parte de la insurgencia talibán contra un puesto militar en el distrito de Waziristán Norte, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en el que

murieron siete soldados y seis insurgentes. Los atacantes embistieron las instalaciones militares con un camión cargado de explosivos y además portaban chalecos explosivos suicidas, causando el colapso del edificio militar y la muerte de siete soldados pakistaníes. El ataque fue reivindicado por el grupo de reciente creación Jaish-e-Fursan-e-Muhammad, que estaría vinculado al TTP. Horas después de la acción militar pakistaní, Afganistán respondió con un ataque con mortero contra posiciones militares de Pakistán cercanas a la frontera, causando heridas a cuatro civiles y tres soldados. El portavoz del Gobierno talibán en Afganistán negó que su país diera cobijo a grupos armados en su territorio aunque señaló que dada la extensión de la frontera con Pakistán, había zonas que escapaban a su control.

La acción militar pakistaní se produjo en un contexto de deterioro de las relaciones entre los países vecinos durante el año anterior, como consecuencia del incremento de la actividad de la insurgencia talibán pakistaní, amparada según Pakistán por el régimen talibán afgano en el poder desde 2021. Pakistán señaló que el gobierno afgano no había dado respuesta a sus peticiones de poner fin a la actividad insurgente que utiliza el territorio afgano para sus operaciones en Pakistán y, de hecho, acusó directamente de dar apoyo a los talibanes pakistaníes. En este sentido se pronunciaron a finales de 2023 tanto el primer ministro interino de Pakistán, Anwar ul-Haq Kakar, como el embajador pakistaní en Afganistán, Asif Durrani. Kakar señaló que Afganistán estaba contribuyendo a la escalada de la violencia en Pakistán con su apoyo al TTP y **Durrani afirmó que el TTP estaba bajo el control del Gobierno afgano** y que era su responsabilidad desarmarlo. En este sentido se había pronunciado también el **comité de sanciones de Naciones Unidas contra los talibanes**, que señaló en su informe que los vínculos entre los talibanes, el TTP y al-Qaeda eran fuertes y que estos grupos tenían un amplio margen de maniobra dado el apoyo del régimen afgano. El acuerdo de Doha firmado entre los talibanes y el Gobierno de EEUU en 2020 contemplaba que los primeros no permitirían que el territorio afgano fuera utilizado para planificar acciones terroristas en contra de EEUU y sus aliados, pero ante las acusaciones pakistaníes de que el Gobierno afgano estaba violando los términos del acuerdo, los talibanes respondieron que el acuerdo había sido firmado con EEUU, al tiempo que negaban que su territorio estuviera siendo utilizado para perpetrar ataques terroristas. La escalada militar en la tensión entre ambos países se producía después de que **Pakistán hubiera adoptado el año previo otras medidas de presión sobre Afganistán**, la más severa de ellas el inicio de la deportación de centenares de miles de personas refugiadas afganas que residen en Pakistán. Esta deportación representaba un importante reto para Afganistán, dada la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y la frágil situación económica, que se une a la crisis de derechos humanos tras el ascenso talibán al poder.

## PAPÚA NUEVA GUINEA

### El Gobierno anuncia un acuerdo de cese de hostilidades entre las dos alianzas tribales involucradas en uno de los peores episodios de violencia en la historia reciente del país

Las autoridades señalaron que a mediados de febrero se había producido una de las peores masacres de la historia reciente del país cuando **como mínimo 49 personas (64 según varias fuentes) murieron y otras muchas resultaron heridas durante los enfrentamientos tribales que se registraron a mediados de febrero** en una zona fronteriza entre los distritos de Wabag y Wapenamanda, en la provincia de Enga (región de Tierras Altas). Según varias informaciones, la violencia estalló cuando la tribu ambulin tendió una emboscada a la tribu sikin en la aldea de Akom después de enterarse de un posible ataque planeado contra ellos. Según las autoridades, los episodios de violencia enfrentaron principalmente a las tribus Ambulin y Sau Walep, con las comunidades Sikin, Kaekin y Palinu, pero las autoridades locales señalaron que miembros hasta 17 tribus habían participado en los enfrentamientos. Además, las autoridades regionales también **declararon el creciente uso de “mercenarios” o de personas foráneas a la zona de conflicto que habían sido contratadas para participar en determinados ataques**, y también que, si bien los episodios de violencia de este tipo en el pasado se habían llevado a cabo con armas muy rudimentarias, en los últimos tiempos se había observado un mayor uso de armamento de fuego automático y sofisticado, como ametralladoras, carabinas, escopetas y granadas de mano.

Tras la conmoción nacional que comportó la mencionada masacre y la preocupación que expresaron algunos países de la región, a mediados de marzo los líderes de las dos principales alianzas tribales involucradas en la violencia –Yopo y Palinau—se reunieron durante varios días en la capital, Port Moresby, bajo los auspicios del Comité de Iniciativa de Paz (PIC) del Gobierno, y **firmaron un acuerdo de alto de fuego incondicional de tres meses** de deposición (pero no entrega) de las armas. En dicho acuerdo, ambas alianzas también se comprometieron a cesar y desistir de toda forma de violencia y enfrentamientos hostiles; a cesar todo comportamiento bélico, provocativo, incitador o irrespetuoso; a permanecer únicamente dentro de sus respectivos límites territoriales consuetudinarios y no traspasar los límites territoriales tradicionales de cada tribu; a autorizar que el personal de seguridad esté presente en todas las áreas conflictivas hasta que la normalidad se haya restablecido por completo; y a trabajar junto con el Estado y sus agencias y a través de cauces legales e institucionales para abordar todos los demás conflictos y problemas en la comunidad, poner fin la violencia y restaurar la paz y la normalidad en sus comunidades. Además, de la participación de “mercenarios”, del mayor acceso a armamento sofisticado o de la creciente implantación en la región del narcotráfico proveniente

de Indonesia, algunos análisis también han señalado la **importancia de la falta de presencia institucional del Estado, y en particular de la Policía**, en algunas de las regiones remotas del país en las que históricamente se ha concentrado la violencia clánica y comunitaria. En la provincia de Enga, por ejemplo, hay unos 200 efectivos policiales para una población de unas 300.000 personas, una ratio muy inferior a la que recomienda Naciones Unidas. Finalmente, algunos análisis sostienen que parte de la violencia que se ha registrado recientemente podría guardar relación con el desarrollo y resultado de las elecciones del 2022. La Policía señaló que, aún si se suele observar un incremento de la violencia en periodos electorales, en las elecciones del pasado año sí hubo una mayor alineación de algunas comunidades con determinados candidatos locales, detección de prácticas de clientelismo y rumores y acusaciones de secuestro de urnas y fraude y soborno en el escrutinio de votos.

A pesar de la visibilidad política y mediática de la masacre de mediados de febrero, en determinadas regiones del país ha habido históricamente enfrentamientos de raíz clánica y tribal vinculados a cuestiones de tierra, robos, honor o disputas familiares y clánicas. Según ACLED, en dicha provincia de Enga en 2023 se registró la muerte de 208 personas, aunque algunas fuentes sostienen que tal cifra se eleva a alrededor de las 300. Cabe destacar los enfrentamientos tribales que se registraron durante todo el mes de agosto, y que según varios medios de comunicación provocaron la muerte de unas 150 personas.

## TAILANDIA

**Tras un año de parálisis en el proceso de paz, el Gobierno y el grupo armado BRN alcanzan un acuerdo para tratar de reducir los niveles de violencia en el sur del país y explorar soluciones políticas al conflicto**

En el sur de Tailandia, **las delegaciones negociadoras del Gobierno y del grupo armado de oposición BRN se reunieron en Kuala Lumpur tras un impasse de 12 meses en el proceso de paz**. Aunque oficialmente no trascendieron detalles sobre los acuerdos alcanzados en la reunión, algunas voces señalaron que ambas partes están negociando y desarrollando una hoja de ruta (denominada oficialmente Plan Global Conjunto hacia la Paz) que se centra principalmente en dos cuestiones: por un lado, **la reducción de los niveles de violencia en el sur del país** --supervisada por un mecanismo a decidir entre ambas partes-- y, por otra parte, las consultas públicas con actores políticos, sociales y religiosos relevantes y representativos en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) para abordar las soluciones políticas al conflicto y las cuestiones sustantivas de la negociación, como la forma de gobernanza en el sur del país, o aspectos relacionados con la identidad, la religión, la educación, el modelo económico o los derechos humanos. Cabe recordar que en marzo de 2022 ambas

partes acordaron las soluciones a conflicto deberían partir de la voluntad y aspiraciones del pueblo Patani y deberían ser coherentes con el estado unitario y la constitución de Tailandia. Al finalizar la ronda de negociación de febrero --la séptima desde el inicio del proceso de paz en 2013-- , el facilitador del diálogo en nombre del Gobierno de Malasia, Zulfiki Zainal Abidin, realizó una rueda de prensa acompañado de los jefes de los paneles negociadores del Gobierno y el BRN en la que declaró que al acuerdo entre las partes suponía un avance significativo y un punto de inflexión importante en el proceso de paz. A finales de febrero y a principios de marzo --y se esperaba que lo hicieran nuevamente a mediados de abril--, los equipos técnicos se reunieron para concretar los compromisos asumidos por ambas partes. Además, el 2 de marzo, por primera vez se hizo público un comunicado por parte de las cuatro personas expertas en procesos de paz que, desde 2019 y a petición de ambas partes, han observado y acompañado el proceso de diálogo, tanto en su dimensión oficial y como también en las conversaciones informales y exploratorias. Las cuatro personas observadoras, de nacionalidad tailandesa, británica, alemana y noruega, hicieron público el comunicado para destacar la importancia y significación de los compromisos logrados por las partes hasta el momento y para poner en valor a determinación de las partes en alcanzar un acuerdo político a través del diálogo.

La ronda de negociación del mes de febrero no solamente pone fin a la parálisis del proceso de diálogo, sino que es la primera tras casi una década de Junta Militar (2014-2019) o de un gobierno surgido de la misma (2019-2023). En este sentido, cabe destacar que el jefe negociador del BRN, Anas Abdul Rahman, señaló en febrero que su grupo tenía esperanzas y expectativas de lograr una paz duradera con el nuevo Gobierno de Srettha Tahvisin, que tomó posesión del cargo en septiembre de 2023 tras un largo proceso de negociación entre partidos después de las elecciones celebradas en mayo de 2023. Poco más tarde, en noviembre, el nuevo Ejecutivo designó como jefe del panel negociador a Chatchai Bangchud, vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional y el primer civil en desempeñar el cargo. En enero de 2023 el Gobierno de Malasia había designado a un nuevo facilitador del diálogo, Zulfiki Zainal Abidin, interpretado por algunos medios como un intento del nuevo primer ministro de Tailandia --Anwar Ibrahim, elegido a finales de 2022-- de relanzar las negociaciones de paz y de involucrar más a su país en la resolución del conflicto. Cabe destacar que, según algunos observadores, Malasia no solamente ha ejercido la mediación en el proceso de paz, sino que históricamente ha brindado apoyo al movimiento nacionalista malayo en el sur de Tailandia y es el país en el que viven algunos dirigentes históricos de las distintas insurgencias que han operado en las últimas décadas en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat.

Sin embargo, otros análisis se muestran más cautos respecto del futuro del proceso de paz. En primer lugar, porque las Fuerzas Armadas han tenido una relación

históricamente compleja y tensa con el partido del primer ministro Puea Thai, hasta el punto de perpetrar un golpe de estado en 2004 contra el líder del partido y entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra, y posteriormente en 2014 contra Yinluck Shinawatra, otra destacada dirigente de dicho partido y hermana de Thaksin. Según algunos análisis, determinados sectores de las Fuerzas Armadas se oponen a la resolución del conflicto a través del diálogo y se muestran claramente partidarios de incrementar las operaciones de contrainsurgencia. Cabe recordar que en la mayor parte de las tres provincias de mayoría musulmana

todavía rigen la ley marcial y el estado de emergencia, y que la región cuenta con casi 3.000 puntos de control militar. Por otra parte, algunos análisis sostienen que dentro del BRN existen facciones que se oponen al proceso de paz. A finales de marzo, por ejemplo, **en uno de los mayores ataques coordinados en los últimos años, se registraron 44 incidentes violencia en el lapso de una hora** en las cuatro provincias sureñas (incluyendo Songkhla), que las autoridades locales atribuyeron a grupos armados que querían expresar su desacuerdo con los acuerdos alcanzados en las negociaciones en febrero y marzo.

## EUROPA

**CHIPRE:** La enviada personal del secretario general de la ONU inicia consultas multinivel para explorar bases de acuerdo sobre un reinicio de las negociaciones

**MOLDOVA:** Se incrementa la tensión política entre el Gobierno estatal y Transnistria y el país se retira del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

**RUSIA:** ISIS se atribuye el atentado masivo de Moscú y amenaza con más ataques

### CHIPRE

#### La enviada personal del secretario general de la ONU inicia consultas multinivel para explorar bases de acuerdo sobre un reinicio de las negociaciones

Continúa abierta la oportunidad de relanzar el paralizado proceso negociador para la resolución del estatus de la dividida isla de Chipre, de la mano del inicio del mandato de la enviada personal para Chipre del secretario general de la ONU, si bien junto a ciertas expectativas y nuevo *momentum*, persisten numerosas dificultades. María Ángela Holguín Cuéllar, exministra colombiana y ex negociadora del proceso de paz de Colombia con las FARC, **designada para el cargo** de enviada personal en enero, ha llevado a cabo ya dos primeras rondas de consultas con las partes en conflicto. Su mandato abarca el desarrollo de buenos oficios para identificar si existe base común para la búsqueda de una solución al conflicto. Desde su designación, es posible identificar algunos elementos de oportunidad.

Por una parte, la enviada personal está desplegando un enfoque inclusivo y participativo en sus consultas. En sus dos rondas de viajes a la isla (la primera entre finales de enero y principios de febrero y la segunda en marzo), se reunió por separado con los máximos líderes de las dos comunidades, el presidente grecochipriota, Nikos Christodoulides, y el líder turcochipriota, Ersin Tatar, así como con un amplio espectro de actores, incluyendo negociadores de las partes y miembros de los comités

técnicos conjuntos, representantes de partidos políticos, alcaldías, cámaras de comercio, periodistas, líderes religiosos, asociaciones, think tanks y otros representantes de la sociedad civil, incluyendo mujeres, y personal de Naciones Unidas y diplomáticos, entre otros. Asimismo, la enviada mantuvo consultas con representantes de Grecia, Turquía y el Reino Unido (países garantes de la independencia de Chipre en 1960) en sus respectivas capitales. **Análisis destacaron como fortalezas** este enfoque inclusivo de la enviada especial, la experiencia de su equipo de asesores, así como el tratar de trascender el marco binario de solución de federación vs solución de dos estados y ampliar el marco a la distinción entre paz mutuamente beneficiosa o un estatus poco sostenible. Por otra parte, las rondas de consultas han ido acompañadas y reforzadas por dos reuniones por separado del secretario general de la ONU con **Christodoulides en Bruselas** (marzo) y con Tatar en Nueva York (abril). Asimismo, en su viaje a Bruselas de marzo, Christodoulides asistió a la cumbre del Consejo Europeo y mantuvo reuniones también con su presidente Charles Michel, y el canciller alemán, Olaf Scholz, en torno a las relaciones entre la UE y Turquía y el papel de Turquía en la disputa chipriota. Algunos análisis señalaron la **necesidad de clarificar la posición de la UE hacia Turquía** así como la oportunidad de impulsar la integración regional y de ofrecer a Ankara áreas de colaboración y de aproximarse a Ankara como un socio igualitario, y vincularlo a que se produzcan avances en el proceso de diálogo chipriota. Por otra parte, y previo a la primera visita de Holguín Cuéllar, las autoridades grecochipriotas anunciaron un conjunto de **14 de medidas de construcción de confianza**, que incluían acelerar

el examen de peticiones de ciudadanía de población turcochipriota, entre otras.

No obstante, las dificultades eran patentes. En el marco de las rondas de consultas de Holguín Cuéllar las posiciones de los liderazgos grecochipriota y turcochipriota continuaban alejadas. Christodoulides defendía la reanudación de las negociaciones sobre la base de las negociaciones anteriores y de las resoluciones de la ONU, es decir, de una visión de solución basada en la reunificación a través de un modelo de “federación bizonal y bicomunal”. Por su parte, Tatar, con apoyo de Turquía, reclamaba como precondition para el reinicio del proceso negociador la afirmación de la igualdad de soberanía y de estatus internacional igualitario de la parte turcochipriota. Asimismo, consideraba caduca la visión de solución basada en una federación bizonal y bicomunal y defiende una solución de dos Estados. La posición turcochipriota de Tatar difería con la de **anteriores mandatarios** y es criticada por algunos **partidos opositores turcochipriotas**. Además, según **datos de diversas universidades**, en 2023 un 61,9% de la población turcochipriota apoyaban una federación bizonal bicomunal y otro 17,9% la tolerarían, frente a un 20,2% que estaban en contra (28,8% en contra en 2020). En todo caso, en las rondas de consultas **se preveía poder clarificar las posiciones** de ambos liderazgos, tanto por parte grecochipriota en relación a la igualdad política y participación de las dos comunidades en un eventual arreglo constitucional de reparto de poder, como por parte turcochipriota en relación a la igualdad de soberanía. En ese sentido, será clave el informe que presente en julio el secretario general de la ONU sobre su misión de buenos oficios. Por otra parte, en enero el Consejo de Seguridad de la ONU **renovó por un año más** el mandato de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Chipre (UNFICYP), que en marzo **cumplió 60 años** desde el establecimiento de la misión.

## MOLDOVA

### Se incrementa la tensión política entre el Gobierno estatal y Transnistria y el país se retira del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

El conflicto no resuelto en torno al estatus de Transnistria continuó deteriorándose, con un aumento de la tensión política entre las autoridades de Moldova y Transnistria en el primer trimestre del año, con el trasfondo de la disputa geopolítica entre Rusia y la UE y la guerra en la vecina Ucrania. Entre los elementos recientes de tensión, por una parte, Transnistria convocó en febrero una sesión parlamentaria de emergencia en la que aprobó una resolución en que pedía a Rusia protección frente a crecientes presiones de Moldova. La convocatoria del congreso había incrementado las alertas en Moldova y actores occidentales por si desembocaba en una petición de anexión a Rusia. No obstante, Algunos **análisis señalaron** que la sesión parlamentaria y la petición de apoyo a Rusia reflejaba más bien un intento de las autoridades de Transnistria de obtener atención internacional y de

mostrar su disposición a escalar la tensión. En todo caso, en su discurso anual ante el Parlamento el presidente ruso, Vladímir Putin, no hizo referencia a la petición de apoyo de Transnistria. También la gobernadora de **la región autónoma de Gagáuzia, Eugenia Gutul, pidió apoyo a Rusia** en febrero frente a lo que denunció como presiones de Moldova.

Otro elemento de tensión fue la decisión de Moldova, anunciada en marzo, de **suspender su participación en el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa** (1990), alegando un cambio fundamental en las circunstancias que llevaron a su firma. El ministerio de Defensa señaló la retirada de Rusia en 2023 del tratado y la invasión de Rusia en Ucrania. Moscú, por su parte, abandonó ese año el tratado alegando la expansión de la OTAN hacia el este. Además, Moldova firmó en marzo un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Francia, que establece el marco legal para funciones de entrenamiento de las fuerzas armadas de moldova e intercambio de inteligencia. El acuerdo prevé para ello la apertura de **una misión francesa de defensa** en la capital moldava, Chisinau, en el verano.

Asimismo, en el primer trimestre del año se agravaron las tensiones entre Moldova y Transnistria en torno a la entrada en vigor en enero del nuevo Código aduanero de Moldova, alineado con la legislación europea, y de aplicación uniforme en todo el país, por lo cual se eliminan las exenciones aduaneras que Moldova mantenía a las empresas de Transnistria y les impone tasas a las importaciones y exportaciones. Miles de personas participaron en una manifestación contra la medida el 24 de enero en la capital de la región, Tiraspol –50.000 manifestantes según las autoridades de la región. Según algunos análisis, el nuevo código aduanero se introdujo con **escaso aviso previo**. El ex negociador moldavo en el proceso de diálogo con Transnistria, **Alexandru Flenchea**, señaló también la ausencia de antelación en la información por parte del Gobierno, así como el problema de falta de comunicación entre Chisinau y Tiraspol. En respuesta, Transnistria anunció subidas de impuestos a agricultores de Moldova que utilizan tierras del distrito de Dubasari bajo control del régimen secesionista.

El deterioro de las relaciones entre Moldova y la región secesionista transcurre en un contexto previamente frágil y de incertezas. La invasión y guerra en Ucrania aceleró el acercamiento de Moldova a la UE (estatus de país candidato en 2022 y luz verde en 2023 a las negociaciones de adhesión). En ese nuevo marco, y con el trasfondo de la disputa geopolítica entre Rusia y la UE, Moldova ha incrementado la presión sobre Transnistria para avanzar en la reintegración del territorio independiente de facto, al tiempo que defiende la posibilidad de una unión a la UE en fases (primero el territorio controlado por Moldova y en un periodo posterior, Transnistria). El proceso negociador sobre el estatus de Transnistria permanece limitado a su formato bilateral 1+1, con mediación de la OSCE, ante la negativa de Ucrania –respaldada por Moldova, la UE y EEUU– de reactivar el formato 5+2, en el que

Ucrania y Rusia eran mediadores-observadores. Análisis señalan la intención de Moldova de avanzar hacia la **reintegración de Transnistria sin negociaciones**, mediante medidas de presión económicas, políticas y legales. Entre otras, en 2023 introdujo reformas al Código Penal, que criminalizan el separatismo, y sobre las cuales **la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR) emitió** alertas sobre los riesgos de criminalizar la mera expresión de ideas.

Por su parte, Rusia se mantiene en disputa política con Moldova, en cuestionamiento de su acercamiento a la UE y en el marco de la disputa entre Rusia y actores euroatlánticos. En ese sentido, se han incrementado las alertas de Moldova y sus aliados occidentales sobre intentos de Rusia de interferir en el país –a través de intentos de golpe encubierto, ciberataques, influencia a través de partidos políticos, entre otros medios. Además, mantiene su influencia y lazos culturales y económicos con Transnistria –incluyendo a través del suministro de gas sin coste, del que se beneficia las élites político-económicas de la región, y el pago de una amplia parte de pensiones, entre otros elementos. Rusia también **ha advertido a Moldova de escenarios militares** en caso de que trate de resolver por la fuerza el conflicto. No obstante, **análisis** han señalado que Moscú no estaría en condiciones de defender militarmente a Transnistria. El riesgo de la no renovación a finales de 2024 del acuerdo entre Rusia y Ucrania que permite el suministro de gas a Transnistria a través de su tránsito por Ucrania, genera riesgo añadido de tensiones socioeconómicas. Algunos análisis han señalado la necesidad de aproximaciones externas más holísticas a la región, que no se limiten a la interacción con sus élites, sino con **un mayor involucramiento con su población**, que aborde sus necesidades y temores de manera más explícita.

## RUSIA

### ISIS se atribuye el atentado masivo de Moscú y amenaza con más ataques

Más de 140 personas murieron en el atentado del 22 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú, en el que hombres armados dispararon contra el público en el interior del edificio y prendieron fuego, causando el colapso del techo. Además de las víctimas mortales, el balance a finales de marzo incluía a **cerca de un centenar de personas desaparecidas**, 80 personas hospitalizadas y otras **doscientas que habrían solicitado asistencia médica**. El grupo armado **ISIS reivindicó el atentado** en dos comunicados en su agencia Amaq, sin referirse a ninguna rama en concreto de su organización, y lo enmarcó como un ataque contra cristianos en el contexto de la guerra entre ISIS y los países “que libran una guerra contra el Islam”. Diversos análisis señalaron que el ataque podría haber sido organizado

por la rama de ISIS conocida como Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K), creada en 2015 por comandantes talibanes afganos y pakistaníes disidentes, con premisas más rigoristas y de yihadismo global. **EEUU**, que había avisado a Moscú de riesgos de atentado inminente, también consideraba esa posible autoría. El liderazgo de ISIS emitió un **mensaje el 28 de marzo**, en el décimo aniversario de la declaración de su califato y en el que advertía de que ISIS se estaba expandiendo, y en el que de nuevo reivindicó y justificó el ataque en Rusia, país al que calificaba de “cruzado”. Aunque no se atribuyó el atentado, ISIS-K celebró el ataque en un comunicado, en el que además advirtió que sus ataques no se limitarían a Afganistán y **que llevaría a cabo más ataques externos**.

El atentado puso de manifiesto diversos desafíos. Por una parte, **análisis** señalaron a ISIS-K como la rama de ISIS con más capacidad de organizar ataques fuera de su área inmediata de acción. Analistas apuntaban al atentado de gran magnitud y otros ataques anteriores como una vía para el ISIS-K de mostrar poder y relevancia, distinguirse en el yihadismo global y obtener recursos, en un contexto de **competencia y disputa con el régimen talibán**. Ante la persecución talibán contra ISIS-K, el grupo habría perdido combatientes y territorio dentro del país y reducido su actividad ahí, mientras que **se habría adaptado y transitado** hacia ataques menos frecuentes pero de gran magnitud y desplazado líderes y reclutamiento a fuera del país. Algunos análisis señalaron cómo **ISIS-K aprovecha a su favor** la radicalización de algunos ciudadanos de Asia central. En el caso de Tayikistán, factores como la represión del régimen de toda oposición, la sensación de injusticia vinculada a la pobreza y desigualdad en el país, el legado de la guerra civil, y la situación de discriminación y humillación sistemática en Rusia contra migrantes de Tayikistán y otras nacionalidades de Asia central, **alimentaban esos procesos de radicalización**, unido a las estrategias de reclutamiento de ISIS-K. Por otra parte, esos mismos análisis señalaban las deficiencias y límites de la **estrategia del régimen de Tayikistán** basada en la fuerte represión, que no solo no habría frenado los procesos de radicalización sino que lleva el problema a la esfera clandestina o incluso lo exacerba. Por otra parte, se pusieron también de manifiesto otros desafíos, como el incremento en Rusia de amenazas y **hostigamiento contra migrantes** de Tayikistán y de otras nacionalidades de la región, en el marco del racismo y violencia estructural y directa preexistente y agravado en el contexto de la invasión de Rusia contra Ucrania, en el que **se entrecruzan “patriotismo” y xenofobia**. A su vez, entre otras alertas asociadas al atentado, se añade el impacto que puede generar en el propio régimen talibán y en sus políticas, incluyendo con repercusión en los derechos de las mujeres. **Analistas apuntaron que podría no ser coincidencia** que tras el ataque en Rusia, el liderazgo talibán anunció su intención de imponer interpretaciones más rigoristas de la **sharía**, como el apedreamiento hasta la muerte de mujeres por “crímenes morales”.

## ORIENTE MEDIO

**ISRAEL – HEZBOLLAH, IRÁN:** Escalada de violencia regional amenaza con una guerra abierta

**SIRIA:** Se pone en marcha el organismo para investigar las desapariciones en el marco del conflicto

### ISRAEL – HEZBOLLAH, IRÁN

#### Escalada de violencia regional amenaza con una guerra abierta

A lo largo del primer trimestre se intensificaron las hostilidades entre Israel y Hezbollah y también los ataques que involucran a Israel y a actores iraníes y milicias pro-Teherán en países de la región. Estas dinámicas de violencia continuaron contribuyendo a un clima altamente volátil, con posibilidades de una escalada y un riesgo de confrontación de mayor alcance en toda la zona. Desde principios de año, Israel lanzó una serie de ataques que resultaron en la muerte de cargos altos y medios de Hezbollah –el 8 de enero Wissam al-Tawil se convirtió en el dirigente de mayor rango asesinado por Israel desde los hechos del 7 de octubre– y también de un alto cargo de Hamas radicado en Líbano, Saleh Arouri (2 de enero). A partir de febrero, Israel amplió el alcance de sus operaciones y lanzó una serie de ataques en zonas del Valle de Bekaa (este de Líbano) a más de 100 kilómetros de la frontera. En paralelo, sus ofensivas causaron un mayor número de bajas civiles, una decena en febrero. A finales de marzo, un ataque aéreo israelí mató a otros siete trabajadores humanitarios, hecho que llevó a la misión de la ONU en Líbano (UNIFIL) a advertir sobre una escalada en el conflicto. Adicionalmente, la intensidad de los ataques israelíes ha llevado al desplazamiento forzado de al menos 82.000 libaneses, la mayoría de los cuales se están concentrando en áreas urbanas próximas, como Tiro, la ciudad más importante del sur de Líbano. La milicia shíi libanesa, por su parte, continuó con sus ofensivas contra varias posiciones y bases israelíes próximas a la zona fronteriza de facto con Líbano, incluyendo el área de los Altos del Golán ocupados. Según datos de las fuerzas israelíes, desde los ataques de Hamas del 7 de octubre se habían lanzado un total de 3.100 cohetes desde Líbano hacia Israel. Algunas iniciativas diplomáticas han intentado abordar el conflicto entre Israel y Hezbollah, hasta ahora sin éxito. El partido-milicia shíi habría insistido en que no llegaría a ningún tipo de acuerdo hasta conseguir primero un alto el fuego para Gaza.

En lo que respecta a Irán y sus milicias afines, el año se inició con un mortífero ataque en Kerman (sureste de la república islámica) durante la ceremonia de conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato por EEUU del comandante de la Fuerza al-Quds, Qassem Soleimani. La ofensiva (3 de enero) fue la más letal en décadas –80 muertes y 200 personas heridas– y aunque inicialmente generó sospechas sobre una posible implicación del Gobierno israelí, finalmente fue reivindicada por ISIS. Durante el trimestre Teherán sí confirmó la muerte de diversos miembros de la Guardia Republicana (IRGC) en ataques aéreos atribuidos a Israel en Damasco, incluyendo cinco

altos mandos en una ofensiva en enero en la capital siria. Este ataque se habría producido tras la destrucción con misiles balísticos iraníes de un presunto centro de espionaje israelí en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Esta última incursión se considera, a su vez, como una represalia al asesinato en diciembre en un ataque de Israel del comandante de la Guardia Revolucionaria Razi Musavi cuando se encontraba en Damasco. La escalada Israel-Irán se intensificó de manera significativa a principios de abril, después de un ataque israelí contra el consulado iraní en la capital siria. Este ataque ha sido considerado como diferente y de mayor envergadura por afectar directamente una sede diplomática de Teherán, desafiando así la soberanía iraní. La ofensiva causó la muerte de siete personas, entre ellas dos altos cargos de la Guardia Republicana, incluyendo el brigadier general Mohammad Reza Zahed, un veterano comandante que ha liderado las operaciones iraníes en el exterior, la fuerza al-Quds, tanto en Siria como en Líbano. Análisis apuntan que los dirigentes iraníes están en una posición en la que deben o desean responder de una manera abierta y visible para vengar el asesinato de sus altos cargos, pero también porque no hacerlo podría comprometer su credibilidad como poder regional. No contestar o hacerlo solo a través de acciones de sus milicias afines no sería una opción y comprometería su capacidad de disuasión. Teherán tampoco estaría dispuesto a que las muertes de altos cargos del régimen se conviertan en una práctica habitual en el actual escenario. De momento, el líder supremo iraní ha advertido que “hombres valientes” castigarán a Israel y representantes de Teherán han asegurado que las embajadas israelíes no serán más lugares seguros.

### SIRIA

#### Se pone en marcha el organismo para investigar las desapariciones en el marco del conflicto

Tras su creación en junio de 2023, se puso en marcha el mecanismo creado por Naciones Unidas para esclarecer el destino y paradero de miles de personas desaparecidas en Siria desde el inicio del conflicto armado en 2011. La Institución Independiente para Personas Desaparecidas fue establecida por la resolución 301/77 tras una votación de la Asamblea General –con 83 votos a favor, 11 en contra y 62 abstenciones– gracias a la iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil siria. El organismo inició formalmente sus actividades el 3 de abril con el doble propósito de indagar en lo que ha ocurrido a miles de personas desaparecidas en Siria y, al mismo tiempo, proveer de un apoyo adecuado a víctimas, supervivientes y familiares de las personas desaparecidas. Aunque las cifras oficiales apuntan a 100.000 desapariciones, se estima que más de 155.000 personas habrían

desaparecido en el marco del conflicto armado sirio entre marzo de 2011 y agosto de 2023. La inmensa mayoría de las desapariciones se atribuye al régimen de Bashar al-Assad –más de 135.000, incluyendo casi 3.700 menores de edad y 8.500 mujeres–, mientras que el resto sería responsabilidad de grupos armados como Estado Islámico y Hayat Tahrir Al-Sham, entre otros.

Desde el inicio del conflicto armado se han denunciado numerosas vulneraciones a los derechos humanos en Siria, incluyendo ejecuciones masivas, torturas y durísimas condiciones en las cárceles, hechos que hacen temer por el destino de miles de personas desaparecidas.

Organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años han trabajado por visibilizar esta problemática y luchar contra la impunidad, como la Caesar Families Association y Syrian Campaign expresaron su satisfacción por el inicio del trabajo de la institución. Voces expertas han subrayado que las familias que intentan conocer el paradero de sus familiares desaparecidos afrontan constantes riesgos de padecer abusos, arrestos y extorsiones. Dado que la mayoría de las personas desaparecidas son hombres, **son mujeres quienes a menudo lideran las búsquedas y experimentan discriminaciones y abusos**. Se espera que estas mujeres y sus familias reciban apoyo de la nueva institución.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

**èc̃p̃** escola de cultura de pau

**UAB**  
Universitat Autònoma de Barcelona

**Escola de Cultura de Pau**  
Edifici B13, Carrer de Vila Puig,  
Universitat Autònoma de Barcelona 08193  
Bellaterra (Espanya)  
Tel: +34 93 581 14 14  
pr.conflictes.escolapau@uab.cat  
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:

